

COMPRENDER LA TRATA DE PERSONAS.

Un análisis contextual para la prevención en la región Pacífica colombiana.

ESPACIOS DE MUJER

Esta publicación se presenta en el marco del proyecto de cooperación internacional Comunidades afrocolombianas e indígenas resilientes que luchan contra la trata de personas en la Región Pacífica colombiana, financiado por Mensen met een Missie.

Es importante señalar que los puntos de vista y las conclusiones contenidas en este documento pertenecen únicamente a sus autores y no representan, de manera alguna, las opiniones o políticas de las entidades financiadoras.

En la Corporación Espacios de Mujer, trabajamos por una sociedad libre de Trata de personas.

Lo hacemos mediante la prevención, la atención integral, la investigación y la incidencia. Nos enfocamos en la promoción de los Derechos Humanos y el empoderamiento de las personas afectadas, articulándonos con diversos sectores –gubernamentales, multilaterales, comunitarios y privados – para garantizar un futuro libre de explotación.

Equipo de investigación
Betty Pedraza, Bianca Fidone, Jazmín Santa y Johana Vélez

MEDELLÍN (COLOMBIA)
2025
HTTP://WWW.ESPACIOSDEMUJER.ORG

ISBN Obra independiente: 978-628-97268-0-0



El lenguaje empleado a lo largo de este texto ha sido **cuidadosamente seleccionado** para asegurar la inclusión y consideración de todas las personas, **sin distinción de género.**

PRESENTACIÓN

En el marco del proyecto **“Comunidades afrocolombianas e indígenas resilientes que luchan contra la trata de personas en la Región Pacífico”**, financiado por la ONG holandesa Mensen met een Missie, nos hemos embarcado en un estudio profundo y sistemático sobre la problemática de la trata de personas en esta región de Colombia.

Más allá de las cifras

Si bien las estadísticas nacionales y los informes generales ofrecen una visión panorámica del problema, a menudo resultan insuficientes para comprender las particularidades y las complejidades que se dan en territorios específicos. La región Pacífica, marcada por su diversidad étnica, riqueza natural y, lamentablemente, por la pobreza, el conflicto armado y la presencia de economías ilícitas, requiere un análisis que trascienda los datos y se centre en las experiencias y realidades de las comunidades que la habitan.

Un enfoque territorial

Este estudio se enfoca en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, buscando identificar y analizar los factores de riesgo y las dinámicas específicas de la trata de personas en cada uno de ellos. Nos interesa comprender cómo esta problemática se manifiesta de manera diferente en las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y en la población urbana, así como las intersecciones entre estas diversas realidades.

Incluimos en el análisis Vigía del Fuerte, un municipio de Antioquia, sin abordar el resto del departamento. Esto se debe a que Vigía del Fuerte, si bien es antioqueño administrativamente, tiene fuertes lazos culturales y geográficos con el Chocó, compartiendo el río Atrato y la cercanía a Bojayá. Esta singularidad lo alinea con las dinámicas de la región Pacífica colombiana, el foco central de nuestra investigación. Su inclusión nos permite entender mejor la trata de personas en esta zona de transición única, distinta del contexto general de Antioquia.

Para lograr una comprensión profunda y contextualizada de la trata de personas en la **región Pacífica**, algunas preguntas han orientado nuestra investigación:



¿Cuáles son las poblaciones más afectadas por la trata de personas en la región?
Para identificar qué comunidades y grupos de personas se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de este delito, así como las condiciones de vulnerabilidad específicas que los hacen presa de las redes de trata.



¿Cuál es el perfil de las víctimas de trata en la región?
Para profundizar en las características de las personas que son víctimas de trata en esta región, incluyendo su edad, género, historias de vida y los factores que las hicieron vulnerables a la explotación.



¿Qué servicios existen para la atención y protección de las víctimas de trata en la región y quiénes los proporcionan?
Para mapear la oferta de servicios existentes para la atención y protección de las víctimas de trata en los cuatro departamentos, incluyendo organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones religiosas, agencias internacionales y otras entidades que brindan asistencia y oportunidades de reintegración.

Un compromiso con la transformación

Aspiramos a que este estudio no solo contribuya al conocimiento académico sobre la trata de personas en el Pacífico colombiano, sino que también genere información útil para el diseño de estrategias de prevención más efectivas, el fortalecimiento de la protección de las víctimas y la mejora de la respuesta institucional ante este delito.

Creemos que es fundamental dar voz a las realidades y las experiencias de las comunidades afectadas por la trata de personas, cuyas historias raramente encuentran espacio en los informes y estadísticas nacionales. Este estudio es un esfuerzo por visibilizar estas voces y contribuir a la construcción de un futuro más justo y seguro para todes.

SIGLAS

AGC: Autodefensas Gaitanistas de Colombia

ACIN: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

ESCNNA: Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes

GANE: Grupos Armados No Estatales

GLOTIP: Global Report on Trafficking in Persons

JEP: Jurisdicción Especial para la Paz

MAP: Accidentes con Minas Anti Personales

MSE: Municiones Sin Explosionar

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

VBG: Violencias basadas en género

TABLA DE CONTENIDO

1.Marco conceptual 6

1.1. La trata de personas 6

1.2. Finalidades de la trata 7

1.3. Víctimas y tratantes 8

1.4. Diferencias y similitudes de la trata de personas con otros fenómenos históricos 9

2. Ruta metodológica 12

2.1. Enfoques 14

3. Región Pacífica colombiana: contexto 16

3.1. La trata de personas en Colombia y sus afectaciones en la región Pacífica Colombiana 16

3.2. ¿Qué entendemos por región Pacífico colombiano en este diagnóstico? 17

3.3. Chocó 30

3.4. Valle del Cauca 35

3.5. Cauca 41

3.6. Nariño 46

4. Narcotráfico, conflicto armado y trata de personas 52

4.1. Conflicto armado y trata de personas 53

4.2. Dinámicas de la trata de mujeres en el Pacífico 68

4.3. ¿Víctimas de la trata de personas o del conflicto armado? 74

5. Las alertas tempranas lanzadas por la Defensoría del Pueblo 74

6.Acciones contra la trata 80

6.1. Respuesta institucional 81

6.2. Desafíos en la identificación y lucha contra la trata 84

6.3. La cooperación internacional 87

Conclusiones y recomendaciones 88

Bibliografía 93

Anexos 101

Anexo 1: Entrevistas 102

Anexo 2: Metodología utilizada para la revisión bibliográfica 105

1.MARCO CONCEPTUAL

1.1 La trata de personas

La trata de personas es un delito grave y una violación de los derechos humanos que consiste en la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la recepción de personas con el fin de explotarlas. Este proceso nunca es voluntario; los tratantes utilizan la fuerza física, las amenazas, el engaño, la manipulación emocional, el abuso de poder o se aprovechan de la necesidad y la vulnerabilidad de las víctimas para controlarlas y someterlas a condiciones degradantes.

El propósito final de la trata siempre será la explotación.



Existen tres tipos de trata de personas, según el lugar donde ocurren la captación, el traslado y la explotación.

La **trata interna** se da cuando todo el proceso, desde la captación hasta la explotación, ocurre dentro del mismo país donde reside la víctima. La **trata externa** implica que la persona es captada en su país de origen o residencia, pero luego es trasladada a otro país donde será explotada. Por último, la **trata mixta** combina elementos de ambas: la explotación puede iniciar en un país y continuar en otro o presentarse una conexión entre la trata interna y externa en distintas fases del proceso.

1.2 Finalidades de la trata

Las finalidades de la trata son diversas y abarcan distintas formas de explotación:



- **Explotación sexual/Prostitución forzada:** obligar, manipular o coaccionar a alguien a realizar actos sexuales sin consentimiento, en condiciones degradantes. Además de la explotación sexual/prostitución forzada, incluye pornografía, servicios de webcam y otras formas de explotación vinculadas al contexto de viajes y turismo.

- **Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA):** utilizar menores en actos sexuales a cambio de beneficios, implicando traslado y restricción de libertad.

- **Servidumbre por deuda:** forzar a trabajar indefinidamente para pagar una deuda, a menudo manipulada por el tratante, con control total sobre la víctima e imposibilidad de escapar.

- **Mendicidad ajena:** obligar a pedir dinero para beneficio de otro, mediante amenazas o aprovechamiento de la vulnerabilidad.

- **Matrimonio servil:** imponer un vínculo matrimonial sin consentimiento real, especialmente a mujeres y niñas, con fines de explotación sexual o trabajo doméstico.

- **Comisión de actos delictivos/Criminalidad forzada:** obligar a una persona a cometer robos (incluido el carterismo), hurtos en comercios, tráfico de estupefacientes, fraude, ciberdelincuencia y otras actividades similares que están castigadas con penas e implican una ganancia económica.

1.3. Víctimas y tratantes

Cualquier persona puede ser víctima de trata, sin importar su condición (edad, género, nacionalidad, orientación sexual, etnia, condición socioeconómica, discapacidad o situación migratoria). Sin embargo, la vulnerabilidad social, económica o emocional aumenta significativamente el riesgo. La pobreza, la falta de educación, la violencia familiar, la discriminación, el desplazamiento y la falta de redes de apoyo hacen a las personas más susceptibles a la manipulación de los tratantes.

Los tratantes pueden ser individuos o redes organizadas. A menudo, son personas cercanas a la víctima: parejas, familiares, amigos o figuras de autoridad en las que confiaban. Esta cercanía facilita la captación mediante promesas de trabajo, estudio, dinero o relaciones.

Los tratantes usan estrategias de manipulación emocional y psicológica, compartiendo a menudo idioma, origen, cultura o edad para generar confianza. Su objetivo es aislar a la víctima de su familia y amigos, debilitando su autonomía y perpetuando la explotación.



1.4 Diferencias y similitudes de la trata de personas con otros fenómenos históricos

Es indudable que la trata de personas tenga patrones y tendencias comunes a otros fenómenos históricos. Para fines de nuestro estudio, esto puede contribuir a una mejor comprensión de las causas y consecuencias de la trata de personas, así como a la identificación de estrategias más efectivas para su prevención y combate.

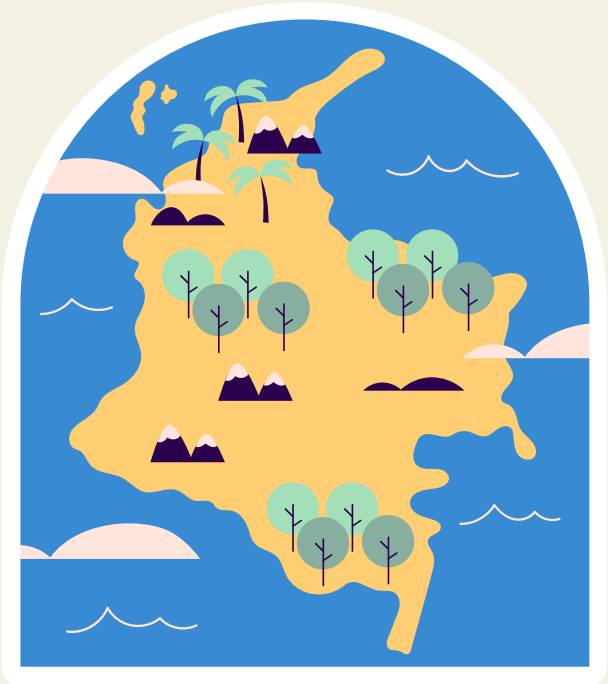


1.4.1 Esclavitud colonial/esclavización y trata de personas

El contexto histórico y socioeconómico de la región Pacífica colombiana influye profundamente en la trata de personas. La pobreza persistente, arraigada desde la esclavitud y exacerbada por siglos de limitado desarrollo institucional y económico, genera escasez de recursos y oportunidades para la población afrocolombiana. Esta situación perpetúa la vulnerabilidad y la explotación.

La debilidad institucional se traduce en infraestructura y servicios precarios. La falta de acceso a educación y empleo empuja a habitantes de zonas marginadas como Tumaco, Buenaventura y áreas rurales de Nariño y Cauca a buscar sustento en economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. (International Crisis Group, 2019) Esta alta pobreza y la escasez de empleos formales crean un ambiente donde las personas son más susceptibles a la explotación y las redes de trata aprovechan su fragilidad para utilizarlas como mano de obra forzada.

En comunidades marginadas como Tumaco y Buenaventura, la falta de infraestructura y servicios básicos, sumada a la participación en economías ilegales, facilita la explotación sexual y laboral. Las víctimas quedan atrapadas en ciclos de abuso y pobreza. La limitada oferta educativa tampoco ayuda a desarrollar habilidades y oportunidades, lo que incrementa aún más la vulnerabilidad a la trata.



1.4.2 Esclavitud vs. trata de personas: diferencias

Cuando definimos la trata de personas la esclavitud del siglo XXI resaltamos la continuidad de los ciclos de explotación y opresión que, si bien se han adaptado a nuevas formas y contextos, mantienen prácticas de abuso que reflejan los horrores de la esclavitud.

Ambas son formas extremas de explotación:

La **esclavitud**, institución reconocida y legalizada en su tiempo, trataba a las personas como objetos sin libertad y propiedad sin derechos, sometiéndolas a trabajos forzados sin remuneración y en condiciones inhumanas.

La **trata de personas**, ilegal y combatida por leyes internacionales, necesita el engaño, la coacción y la manipulación para explotar a las personas, ejerciendo un control menos visible, pero igualmente opresivo.

Característica	Esclavitud	Trata de personas
 **Propiedad**	La víctima es propiedad.	La víctima es una persona explotada.
 **Propósito**	Propiedad y control total sobre la persona.	Explotación de la víctima.
 **Control**	Control total por parte de los esclavistas sobre *sus propiedades*.	Control total a través de la coerción, violencia y amenazas.
 **Derechos**	Los esclavos no eran titulares de derechos y libertades básicas.	Las víctimas son PRIVADAS del ejercicio de sus derechos y libertades básicas.
 **Legalidad**	Institución legalizada.	Sistema clandestino.
 **Injusticia Social**	Base para la injusticia social.	Perpetúa ciclos de injusticia en contextos de pobreza y vulnerabilidad.
 **Objetivo**	Maximizar el beneficio económico por medio de la explotación, a expensas de la libertad y dignidad de las personas.	

Habiendo establecido una comprensión clara de la trata de personas y sus diversas manifestaciones, incluyendo sus finalidades y las complejidades de las víctimas y tratantes, el siguiente capítulo profundizará en la metodología empleada para investigar este fenómeno en la región Pacífica colombiana.

2.RUTA METODOLÓGICA

La presente investigación se centra en la compleja problemática de la trata de personas en la región Pacífica colombiana.

Esta elección temática responde a la necesidad de profundizar en las dinámicas específicas que caracterizan este delito en un contexto marcado por la diversidad étnica, la riqueza natural y, lamentablemente, por la persistencia de factores de vulnerabilidad como la pobreza, el conflicto armado y la presencia de economías ilícitas. Si bien existen estudios en el ámbito nacional, resulta crucial analizar las particularidades territoriales de la trata, comprendiendo cómo se manifiesta de manera diferenciada en las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, así como en los centros urbanos de la región.

En este sentido, la investigación aborda el problema de la persistencia y la complejidad de la trata de personas en el Pacífico colombiano, reconociendo sus graves consecuencias para las víctimas y el tejido social. De manera más específica, se busca responder a interrogantes fundamentales sobre las redes de trata que operan en la región, su vinculación con otros delitos, la insuficiencia de medidas de protección y atención a las víctimas, la impunidad que rodea a los casos y el impacto diferenciado de la trata en grupos vulnerables como mujeres, niños, indígenas y afrocolombianos.



Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es **analizar las dinámicas de la trata de personas en la región Pacífica colombiana, con el fin último de contribuir al diseño de estrategias efectivas de prevención y atención a las víctimas**.

Para alcanzar este propósito, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar los factores de riesgo y las modalidades de captación y explotación de personas en la región.

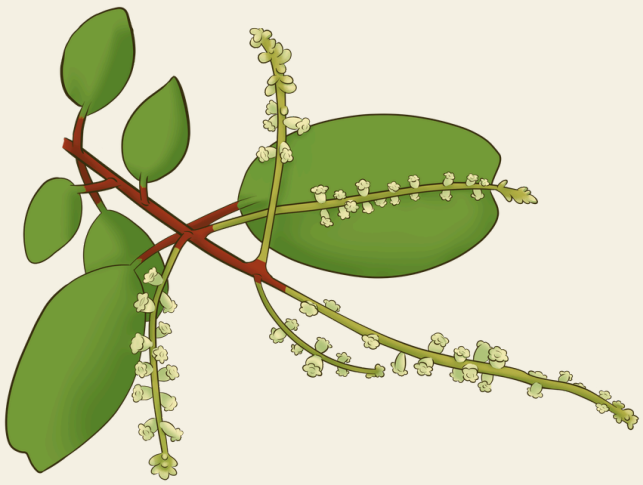
2. Caracterizar el perfil de las víctimas y los tratantes, considerando variables como edad, género, etnia y origen geográfico.

3. Examinar la relación entre la trata de personas y otros fenómenos sociales como el conflicto armado, la pobreza, la migración y el narcotráfico.

4. Evaluar la efectividad de las políticas y programas existentes para la prevención y lucha contra la trata.

5. Proponer recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional y comunitaria a la trata en la región.

Para llevar a cabo esta investigación, se ha adoptado un enfoque metodológico mixto, que combina la rigurosidad de los métodos cuantitativos con la profundidad de los métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos incluyen el análisis estadístico de datos secundarios provenientes de fuentes oficiales. Por su parte, los métodos cualitativos comprenden la realización de entrevistas semiestructuradas y en profundidad con diversos actores clave, para explorar las experiencias y percepciones de diferentes grupos poblacionales, el estudio de casos específicos para comprender las dinámicas de la trata, el análisis de contenido de documentos relevantes y, cuando fue posible y éticamente viable, la observación participante en contextos relevantes.



2.1 Enfoques

La investigación se fundamenta en una serie de enfoques teóricos que permiten analizar la trata de personas desde diferentes perspectivas.



Derechos humanos: afirma que todas las personas, simplemente por el hecho de serlo, tienen derechos inalienables e irrenunciables. Estos derechos son universales, indivisibles, interdependientes e imprescriptibles, y su respeto y protección deben ser garantizados independientemente de la edad, nacionalidad, género, condición social, orientación sexual o cualquier otra característica. Este enfoque pone al ser humano como el centro de las acciones, reconociéndolo como sujeto y protagonista de su propia vida.



Género: se basa en reconocer que la desigualdad estructural entre los géneros es uno de los factores clave que facilita y perpetúa la explotación y la trata. Este enfoque entiende que las relaciones de poder desiguales entre géneros, donde las mujeres, adolescentes y niñas ocupan frecuentemente posiciones subordinadas, lo que las hace especialmente vulnerables a ser víctimas de delitos como la trata, particularmente en las finalidades de explotación sexual, trabajo forzado y servidumbre doméstica.



Étnico: reconoce y valora la diversidad cultural, social y política de las comunidades étnicas, como los pueblos indígenas, afrocolombianos, Rrom, raizales y palenqueros. Estas poblaciones se caracterizan por sus prácticas, cosmovisiones y estructuras sociales y culturales propias, las cuales han sido preservadas a lo largo del tiempo, consolidando su identidad colectiva basada en un origen, historia y tradiciones particulares.



Interseccionalidad: articula y analiza la confluencia de múltiples categorías identitarias o características particulares como edad, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, etnicidad, discapacidad, ruralidad, rol social o político, clase social, entre otras. Este enfoque subraya que las identidades y características poblacionales no son elementos aislados, sino que se interrelacionan de manera compleja, influyendo en el acceso a derechos y oportunidades, y en las prácticas de discriminación y exclusión que enfrentan las personas. De esta forma, la discriminación y la vulnerabilidad pueden intensificarse cuando varias características coinciden, creando afectaciones aún más profundas.

Migratorio: se centra en abordar las vulnerabilidades específicas de las personas migrantes, quienes, al cruzar fronteras ya sea internas o internacionales, son más susceptibles a ser explotadas. Este enfoque incluye medidas de prevención y detección temprana en zonas de alto tránsito migratorio. Además, promueve la cooperación internacional entre países de origen, tránsito y destino, y fomenta alternativas legales y seguras para la migración.

En conjunto, esta ruta metodológica busca proporcionar un marco riguroso y completo para la investigación, permitiendo obtener resultados que contribuyan a una comprensión más profunda de la trata de personas en el Pacífico colombiano y al desarrollo de estrategias efectivas para su erradicación.

Una vez definida la ruta metodológica, que abarca los enfoques teóricos y la aproximación investigativa para abordar la trata de personas, el estudio se adentrará ahora en el contexto específico de la región Pacífica colombiana, explorando los factores que inciden en la problemática.



3.REGIÓN PACÍFICA COLOMBIANA: CONTEXTO

3.1 La trata de personas en Colombia y sus afectaciones en la región Pacífica colombiana

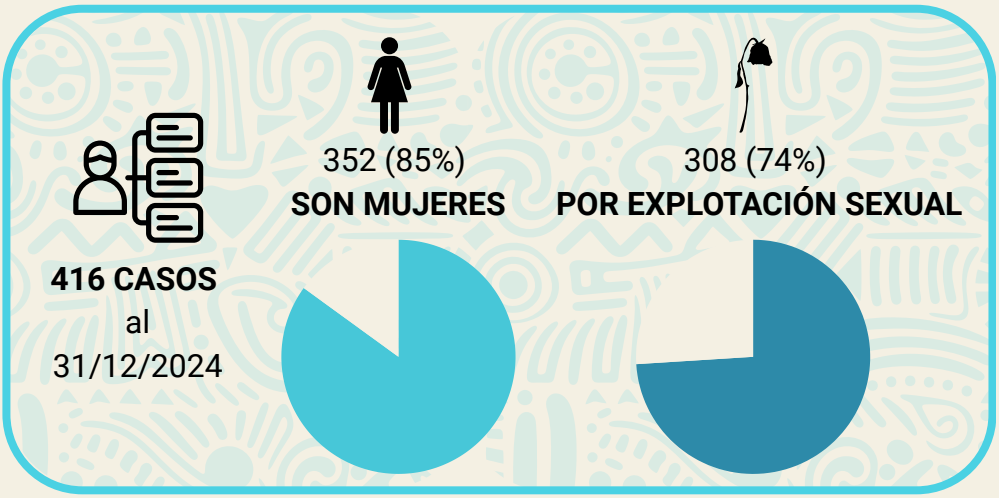
Ningún país en el mundo está a salvo de la trata de personas: 156 países (95 % de la población mundial) están afectados por este delito, ya sea porque sirven como país de origen, tránsito o destino. (GLOTIP, 2024)

Colombia es uno de los países más golpeados por la trata de personas, especialmente mujeres, niñas, niños, hombres, adolescentes, población LGBTIQ+, incluyendo a personas migrantes venezolanas, población afrodescendiente, personas con discapacidades y aquella población que vive en áreas controladas por los grupos armados ilegales. A pesar de cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de este delito (según el Reporte de trata de Personas 2024 (TIP Report) del Departamento de Estado de EE. UU.), en el país persisten deficiencias en la identificación de víctimas, así como en los servicios de asistencia y protección a las víctimas y en la investigación del delito.

Los registros oficiales, publicados por el Ministerio del Interior, dan cuenta de un país en donde la trata de personas afecta a las mujeres en el 85 % de los casos, prevalentemente por explotación sexual, invisibilizando otros fines como el trabajo forzoso, el reclutamiento ilícito y el matrimonio servil. El copioso flujo migratorio desde Venezuela ha contribuido a la internacionalización del delito. En Colombia, las estadísticas desde el año 2020 revelan que entre el 30 % y el 40 % de las víctimas de trata son extranjeras, con una alta proporción (al menos el 80 %) de nacionalidad venezolana.

A diciembre de 2024, el Observatorio del Delito de trata del Ministerio del Interior había registrado **416 casos de trata de personas**. El 74 % de ellos están relacionados con fines de prostitución forzada - explotación sexual y 29 son las denuncias relativas a jóvenes, entre 12 y 17 años, lo que subraya la vulnerabilidad de menores de edad y la urgencia de fortalecer las medidas de protección y prevención.[1]

1 Datos del Ministerio del Interior suministrados a la Corporación Espacios de Mujer por el Grupo de Lucha Contra la trata de Personas, 3 de febrero de 2025.



3.2 ¿Qué entendemos por región Pacífica colombiana en este diagnóstico?

La Constitución colombiana de 1991 reconoce al país como pluriétnico y multicultural, destacando la existencia y participación de **los pueblos indígenas, el pueblo Rrom y las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras** (de San Basilio, en el departamento de Bolívar). Es importante señalar que la población raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina posee una identidad diferenciada y no se autoreconocen dentro del grupo de población negra, afrocolombiana o palenquera del continente. Cada uno de estos grupos se distingue por su cultura, lengua, historia y características físicas.

La región Pacífica colombiana, que administrativamente abarca el noroccidente de Antioquia, Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, alberga aproximadamente 1.5 millones de personas (2.7 % del total nacional). De esta población, un 80 % es afrocolombiana, un 12 % indígena y un 8 % mestiza. Las mayores concentraciones se encuentran en Quibdó, Buenaventura y Tumaco, así como en asentamientos a lo largo del río San Juan, ligados a la extracción de oro y platino de aluvión. (Comisión de la Verdad, 2024)

A pesar de su importancia estratégica por el puerto de Buenaventura y su frontera con Panamá, la región Pacífica colombiana ha sufrido históricamente aislamiento, debilidad institucional, escasa presencia estatal y limitado acceso a derechos.

Imagen 1. División política de la región Pacífica colombiana



Esta ecorregión, de gran biodiversidad y alta pluviosidad, ha sido históricamente regida por una economía extractiva que ha deteriorado sus recursos hídricos y forestales. A esto se suma la creciente presencia de grupos ilegales vinculados a la minería informal e ilegal y al cultivo y comercio de drogas.

La región Pacífica colombiana, predominantemente rural y con un 90 % de población afrocolombiana e indígena, presenta altos índices de pobreza multidimensional y se ve gravemente afectada por el conflicto armado y las economías ilegales. Persisten significativas deficiencias en infraestructura para el acceso a servicios y en la calidad de la atención de salud. Chocó lidera los índices de pobreza por ingresos con un 42.8 %, seguido por Cauca (24 %), Nariño (23.2 %) y Valle (10.8 %). Estos altos niveles de pobreza se agravan por la prevalencia del trabajo informal, que limita la movilidad social. (RAP Pacífico, 2022)

La informalidad surge como una alternativa ante el desempleo en un mercado laboral restringido. Además, el auge de cultivos ilícitos, la minería y el comercio de madera ofrecen ingresos a jóvenes y familias ante la falta de oportunidades formales.

Su ubicación estratégica convierte a la región en un corredor para la trata de personas. La conexión con rutas migratorias hacia Panamá y Ecuador, junto con la precaria infraestructura y la falta de protección social y seguridad, aumentan la vulnerabilidad de estas poblaciones.



3.2.1. Turismo

Los atractivos naturales, la preservación de los ecosistemas y la riqueza cultural de toda la región son motivos para hacer turismo en el Pacífico colombiano, convirtiéndose en una fuente de ingresos adicional. El avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico es otra experiencia única que todos los años, de julio a noviembre, combina la belleza natural de esta región con la majestuosidad de estos gigantes marinos.

El gobierno colombiano ha invertido considerables recursos económicos para promover el turismo en la región Pacífica colombiana, enfocándose en impulsar la infraestructura turística y mejorar la competitividad en los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Sin embargo, no es claro cómo el aumento del turismo pueda enfrentarse al surgimiento o acentuación de problemas sociales como la trata de personas, ya presente en esa región prevalentemente con fines de servicios forzados y explotación sexual.

Desde algunos años, la industria del turismo en la región está en discusión por su relación con la explotación sexual de mujeres y niñas, promoviendo el sexo “exótico” como una atracción y exacerbando estereotipos racistas y sexistas. También algunas campañas, tanto gubernamentales como privadas, han promovido implícitamente la explotación sexual, utilizando imágenes y mensajes que sugieren una sexualidad desbordante asociada a mujeres indígenas y afrodescendientes. (Chiarotti, 2003)

En este contexto, los niños y las niñas de comunidades afro e indígenas están particularmente en riesgo, ya que son explotados por redes de trata vinculadas a grupos al margen de la ley que promueven el turismo con fines de explotación sexual.

3.2.2. Cambio climático

En la región Pacífica colombiana, la variación climática impone serias restricciones al sector agropecuario, manifestadas en una pérdida gradual de productividad de los cultivos, reducción de ecosistemas forestales y disponibilidad de agua, intensificación de la degradación del suelo, y un aumento en la presión sobre zonas ecológicas frágiles como manglares y selvas tropicales. Esto incrementa la vulnerabilidad de los pequeños productores y agrava la seguridad alimentaria en toda la región.

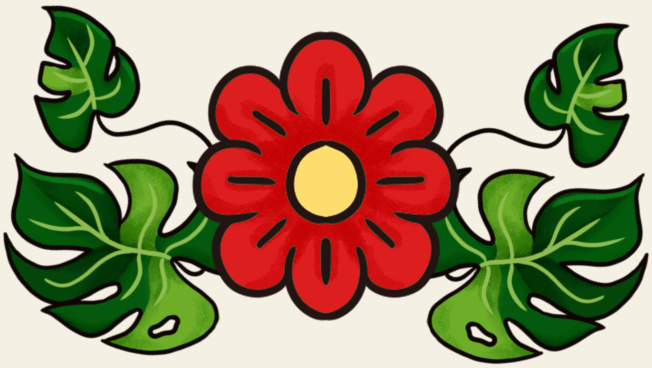
El aumento de la temperatura reduce el rendimiento y la calidad de los cultivos, que son mayoritariamente producidos bajo sistemas familiares, afectando los ingresos y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. Además, la escasez de agua en ciertas áreas, especialmente en la zona andina del Pacífico, representa un riesgo crítico para la vida y la producción agropecuaria

Los sistemas productivos familiares son la principal fuente de subsistencia para muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, dependientes en gran medida de recursos naturales como el agua y el oro. La reducción de su disponibilidad y la falta de acceso a nuevas tecnologías y buenas prácticas productivas impactan negativamente en los ingresos y la productividad, con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria de estas familias y comunidades.

El departamento del Cauca experimenta impactos del cambio climático como intensificación de lluvias, causando inundaciones y sequías, afectando la disponibilidad de agua y cultivos. La agricultura y el turismo han sufrido pérdidas económicas, estimadas en 50 millones de pesos por la Cámara de Comercio del Cauca, debido a fenómenos climáticos extremos. Además, el aumento de temperaturas ha propiciado la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la malaria. (Osorio-Guzmán, Mazorra, Velasco, Muñoz, 2019)

La **trata de personas aumenta con la crisis derivada del cambio climático** y sus efectos en la región Pacífico, aprovechando la creciente vulnerabilidad económica y social de las comunidades afectadas: disminución de la productividad agropecuaria, escasez de recursos hídricos, inseguridad alimentaria y pobreza ponen a los pequeños productores y comunidades

rurales en una situación económica difícil y las personas son más susceptibles a ofertas de préstamo y empleo fraudulentas o promesas de una vida mejor que, en realidad, encubren situaciones de explotación.



3.2.3. COVID-19

Entre 2020 y principios de 2021, la crisis provocada por el coronavirus agravó significativamente las problemáticas históricamente vividas en estos territorios, más allá del impacto en la salud y seguridad alimentaria: aumentaron las amenazas, los desplazamientos forzados y los asesinatos de líderes sociales. La movilidad territorial se restringió y la presencia de grupos armados, tanto ilegales como legales, se intensificó, ya que aprovecharon la pandemia para expandir su control en las áreas más afectadas por el conflicto y la pobreza.

En ciudades como Quibdó, Tumaco y Buenaventura, el confinamiento exacerbó el número de asesinatos y amenazas contra líderes sociales, profundizando la crisis humanitaria. Además, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia COALICO reportó un aumento del 113 % en el reclutamiento forzado durante el primer semestre del año en comparación con 2019. Los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño. Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes sufrieron aún más debido a la presencia constante de actores armados, deteriorando su acceso a derechos fundamentales. (RAP Pacífico, 2022)

También la capacidad de respuesta institucional se debilitó: en Nariño, Cauca y Chocó, las comunidades indígenas fueron gravemente afectadas por la pérdida de miembros y la interrupción de sus medios de vida. Además, el derecho a la educación, ya vulnerado antes de la pandemia, se vio aún más comprometido. Con el 90 % de las comunidades del Pacífico sin acceso a internet y la falta de equipos tecnológicos, las clases virtuales resultaron prácticamente imposibles.

La violencia generalizada y la restricción de movilidad, junto con la debilidad institucional en la respuesta a estas crisis, crearon un ambiente propicio para el incremento de la explotación y el reclutamiento forzado, donde las redes de trata pudieron operar con mayor impunidad, ampliando su alcance y eficacia en la captación de víctimas



3.2.4. Estructura productiva

El Pacífico cuenta con una posición geoestratégica que permite conectar a Colombia con 46 países de Oceanía, Asia y América. La Cuenca del Pacífico representa actualmente el 40 % del PIB mundial, la mitad del comercio internacional y cuenta con un mercado que cubre el 61 % de la población del mundo (RAP Pacífico, 2016). Sin embargo, esta potencialidad no ha significado una transformación del modelo productivo ni una mejora en las condiciones de competitividad y calidad de vida de sus habitantes.

Internamente, la región expone diferentes grados de desarrollo.

En la zona andina se concentran los mayores volúmenes de la actividad empresarial y económica, incluyendo las cadenas productivas mejor estructuradas (caña de azúcar, café), los alimentos procesados, la industria farmacéutica, de belleza y la participación de inversionistas internacionales.

Los **municipios ubicados en el litoral** tienen una estructura productiva desconectada de los principales centros de consumo regional. Este territorio se caracteriza por la diversidad ambiental y étnica, la generación de modelos de negocio basados en el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales.

Es así como el modelo ofrece pocas opciones productivas y alternativas económicas para los habitantes de las zonas rurales, creando las condiciones propicias para su ingreso a actividades ilícitas o a desplazarse hacia los bordes de la frontera agrícola, generando nuevos frentes de colonización productiva.

La ampliación del conflicto armado y la intensificación de la violencia han aumentado la exclusión: la presión sobre la tierra y el control del territorio han impedido que campesinos, indígenas y afrocolombianos puedan ejercer de forma autónoma sus derechos en los territorios colectivos.



3.2.5. Economías ilegales

En este contexto de debilidad institucional y socioeconómica, las economías ilegales se han convertido en una parte fundamental del paisaje económico y social del Pacífico colombiano. Si por un lado el narcotráfico, la minería de oro ilegal y la extorsión proporcionan medios de subsistencia para muchos habitantes de la región, por el otro perpetúan la violencia y el conflicto. Los grupos armados ilegales se benefician enormemente de estas actividades, consolidando su control territorial y fomentando una dependencia económica que profundiza la brecha entre las comunidades locales y el Estado. (International Crisis Group, 2019)

El narcotráfico es el principal motor de violencia en la región. La alta producción de cocaína en el Pacífico colombiano, especialmente en Tumaco y en los municipios del Cauca y Nariño, está estrechamente vinculada con la violencia y el desplazamiento forzado. Las organizaciones criminales se benefician enormemente de las actividades relacionadas con la cocaína, desde su cultivo hasta el envío internacional, mediante el control de las rutas marítimas y fluviales. La competencia por el control de estos corredores y el acceso a los mercados internacionales de droga provoca enfrentamientos entre grupos armados y entre estos y la población local. La presencia de **carteles mexicanos y el Tren de Aragua** ha intensificado y transformado los fenómenos delictivos en el Pacífico colombiano de diversas maneras:

Los carteles mexicanos (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación principalmente) dominan el narcotráfico, estableciendo una fuerte presencia que busca controlar las rutas de producción y tráfico de cocaína, utilizando el Pacífico como corredor estratégico hacia Norteamérica, Europa y Asia. Establecen alianzas y subcontratan a grupos armados locales colombianos (disidencias de las FARC, ELN, bandas criminales) para el cultivo, procesamiento y transporte de la droga, externalizando riesgos y costos. La gran cantidad de dinero que manejan los carteles mexicanos aumenta la corrupción a nivel local y regional, permeando instituciones y debilitando el Estado de derecho. Buscan rutas más eficientes y seguras, a menudo involucrando comunidades locales bajo presión o cooptación. También pueden introducir nuevas técnicas de procesamiento y transporte. Su poder económico puede influir en otras actividades ilegales como la minería ilegal y el tráfico de armas, fortaleciendo a los grupos armados locales.

La minería de oro Ilegal es otra fuente importante de financiación para los grupos armados y de sustento para muchas comunidades locales. Los grupos armados suelen cobrar extorsiones a los operadores mineros y a los propietarios de tierras para que estas actividades puedan funcionar. La explotación ilegal del oro también contribuye a la devastación ambiental y al deterioro de las prácticas tradicionales, al tiempo que crea una dependencia económica entre las comunidades y los grupos armados.

La extorsión es una fuente significativa de ingresos para los grupos armados. En áreas bajo su control, estos grupos imponen "impuestos" sobre las actividades económicas locales, desde el comercio hasta la agricultura, llegando a afectar el costo de los productos básicos por el monopolio que ejercen, por ejemplo en lugares como Buenaventura.



La ONU ha alertado sobre la grave situación de niños, niñas y adolescentes en estas zonas, donde el reclutamiento forzado es una preocupación significativa. Las dinámicas de movilidad generadas por estas actividades también alteran los tejidos sociales locales, incrementando la prostitución y la explotación sexual. En algunos casos, se ha documentado que grupos armados movilizan mujeres para ofrecerlas a los trabajadores de estas industrias extractivas, exacerbando aún más la desestabilización social y cultural en las comunidades afectadas. (La Silla Vacía, 2024)

3.2.6. Migración

La región Pacífica colombiana se está consolidando como una ruta migratoria emergente, iniciando en Buenaventura (Valle del Cauca) y finalizando en Puerto Kimba (Panamá). A pesar de que puede costar hasta 250 dólares, esta ruta ha ganado popularidad debido a los desafíos y costos asociados con el paso por la selva del Darién.

Rescatan a 28 migrantes, entre ellos un menor de edad, en el Pacífico colombiano.
La Armada de Colombia rescató a 28 migrantes, entre ellos un menor de edad, de diferentes nacionalidades en aguas del Pacífico colombiano, en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), que pretendían llegar a Estados Unidos. Los migrantes habían llegado hasta la comunidad de Chucheros, ubicada al interior del Parque Nacional Natural Uramba, aproximadamente a 45 minutos del Distrito de Buenaventura, indicó la Armada (…) Durante el registro se pudo establecer que se trataba de 28 extranjeros, entre los que se encontraban tres procedentes de China, incluido un menor de 10 años de edad; uno de Sudáfrica, dos de Bangladesh, 20 de India y dos venezolanos. (Infobae, 2024)

El Chocó es uno de los puntos críticos de esta ruta migratoria: la ruta marítima, a pesar de ser percibida como más segura que las terrestres, presenta numerosos riesgos, incluyendo la exposición a actores armados no estatales, redes de trata y tráfico, estafas, violencia sexual, y condiciones extremas como la falta de alimentos y agua. Los migrantes también enfrentan el peligro de naufragios debido a las embarcaciones clandestinas que suelen carecer de estándares mínimos de seguridad y corren el riesgo de ser abandonados en alta mar por sus guías. (Revista de la Universidad de México, 2024).
Las rutas de tráfico de migrantes, que atraviesan esta región, están en auge, y muchos migrantes son explotados sexualmente mientras se dirigen hacia Panamá y otros destinos internacionales. Grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional - ELN controlan el territorio, dificultando cualquier intento de erradicar estas prácticas:

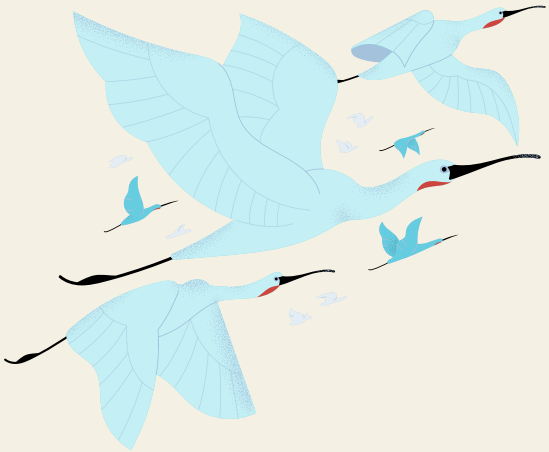
La posición geográfica de los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Jurado es privilegiada por su salida al océano Pacífico y por comunicarse con el vecino país de Panamá; adicionalmente, por los caminos ancestrales que conectan con algunas poblaciones que pertenecen a las subregiones del Darién y del Atrato. Por esas zonas es que se movilizan los grupos armados al margen de la ley, y lo hacen para traficar armas provenientes de Panamá, traficar migrantes, así como para traficar cocaína, comercializarla y embarcarla con rumbo a mercados del Pacífico. (Infobae, 2024)

Las áreas fronterizas son particularmente susceptibles a la trata y explotación sexual debido a la insuficiente vigilancia y control por parte del Estado. La enorme migración de mujeres venezolanas hacia Colombia las ha hecho especialmente vulnerables a ser explotadas por grupos criminales. Según la OIM, el 86% de las venezolanas que han llegado a Colombia ha experimentado algún tipo de violencia de género, a lo que se suman las actitudes xenófobas influenciadas por estereotipos sexistas que restringen sus derechos y capacidad para responder ante estos delitos. (La Silla Vacía, 2024)

Muchas veces resulta difícil identificar a las víctimas de trata, ya que se confunden con las víctimas del conflicto armado: según los testimonios recopilados, muchas de estas víctimas son secuestradas por grupos armados ilegales y trasladadas a sus campamentos, donde se les obliga a realizar trabajos forzados y son explotadas sexualmente.

Asimismo, la migración internacional se ha normalizado en algunas comunidades, donde es común que cada familia tenga al menos un integrante en países como Panamá, España o Chile. Esta tendencia evidencia una presión social y económica que impulsa a las personas a migrar con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, muchas veces sin contar con información clara o realista. Sin embargo, esta expectativa frecuentemente contrasta con la dura realidad que enfrentan, marcada por situaciones de violencia, explotación e incluso trata de personas. Las redes de trata aprovechan la vulnerabilidad y el desconocimiento de quienes migran, generando contextos en los que algunas personas logran regresar, mientras que otras desaparecen sin dejar rastro. Esta situación pone en evidencia la urgencia de fortalecer los procesos de prevención, información y protección para las personas migrantes, especialmente en comunidades donde estas dinámicas se han vuelto cotidianas e incluso naturalizadas.

[...] yo he escuchado muchísimo y uno encuentra que casi cada familia tiene alguien que está en Panamá en España y Chile, si, en esos 3 países, cada familia tiene alguien o un hijo, un sobrino, una sobrina y es extraño. Me contaban esos casos. Que se fue para Chile, pensando que va a conseguir trabajo, pero todo eso termina en violencia o es una situación horrible, digamos, trata de personas, algunos sí logran regresar y algunos no se sabe dónde están [...][2]



3.2.7. Comunicación [Digital]

A pesar de los avances registrados en las cabeceras urbanas de la región Pacífico, la brecha digital en las zonas rurales, especialmente en la zona del litoral, ha aumentado rápidamente, con una baja cobertura y la deficiencia en la calidad de la conectividad. Dicha brecha tiene efectos profundos sobre las condiciones de vida de las personas y comunidades en áreas rurales: la falta de acceso, uso y calidad en la conectividad perpetúa la pobreza y la exclusión social y política y priva a una parte significativa de la población rural de servicios esenciales como educación y salud. La falta de información actualizada impide mejorar la toma de decisiones a nivel individual, familiar y comunitario, exacerbando así la vulnerabilidad de estas poblaciones.

Además, en los cuatro departamentos existen las llamadas zonas en silencio, caracterizadas por la ausencia de medios de comunicación locales y la consecuente falta de noticias locales y de visibilización de las historias y necesidades de sus habitantes.

2 Fragmento tomado de la "Entrevista 02"

La capacidad de escuchar y atender las demandas de los actores sociales es muy limitada.

El 53 % de la población del Chocó vive en municipios sin cobertura informativa; el 38 % en el Cauca y Nariño y el 30 % en el Valle del Cauca.

De los 178 municipios de la región, sólo 17 cuentan con condiciones adecuadas de información local y 161 municipios se encuentran en zonas en silencio, sin medios de comunicación que reporten noticias locales. (RAP Pacífico, 2021)

Si bien la baja cobertura de internet en las zonas rurales y del litoral de la región Pacífico es causa de limitado acceso a servicios esenciales e información crucial (aumentando la vulnerabilidad de las personas por insuficiente información y medidas de protección), por el otro lado puede interpretarse como una capa de protección, dificultando a las redes de trata la captación de víctimas por estos medios.



3.2.8. Corrupción

La costa Pacífica Norte del departamento del Chocó ha atravesado una grave crisis institucional en la última década, derivada de presuntos actos de corrupción que han ocasionado grandes traumatismos y una gran inestabilidad.

3.3. Chocó

El departamento del Chocó[3] se encuentra ubicado en el noroccidente de Colombia. Limita al norte con la República de Panamá y el mar Caribe; al este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; al sur con Valle del Cauca; y al oeste con el océano Pacífico. Se compone por cinco subregiones (Atrato, Darién, Pacífico, Baudó y San Juan). Su geografía aislada, la pobreza extrema y la presencia de grupos armados ilegales han creado un ambiente especialmente favorable para prácticas delictivas. La región, rica en recursos naturales, también sufre las consecuencias del narcotráfico y el desplazamiento forzado, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de sus habitantes.



- Durante 2024, Chocó concentró el 36 % de la población afectada por confinamiento, ocupando el primer lugar por tercer año consecutivo desde 2022. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de municipios estratégicos para las actividades ilícitas de Grupos Armados No Estatales, particularmente en las subregiones del San Juan, Baudó y Atrato, fueron especialmente afectadas de manera prolongada.

- En el departamento, la imposición de toques de queda, paros armados y limitaciones para movilizarse por afluentes hídricos restringieron la movilidad de al menos 30.000 personas. (OCHA, Colombia: Briefing Departamental, Chocó, 2025). Los Grupos Armados No Estatales (GANE) han restringido o impedido el movimiento y acceso de las comunidades a cultivos de pancoger[4] y caminos ancestrales, como consecuencia de artefactos explosivos con Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar (MSE), lo que ha provocado accidentes y muertes en la población civil, así como eventos masivos por confinamiento.

3 Incluye Vigía del Fuerte, un municipio de Antioquia, también analizado en esta investigación por la presencia de poblaciones afrodescendientes, indígenas emberá y mestizos.

4 Se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada. En la zona cafetera son cultivos de pancoger: el maíz, el fríjol, la yuca, el plátano, entre otros.

- Durante el mes de noviembre del 2024, 27 de los 31 municipios de este departamento reportaron afectaciones provocadas por la ola invernal, principalmente por inundaciones y crecientes súbitas de los ríos Atrato, San Juan, Baudó y sus afluentes, que se sumaron a las afectaciones derivadas del conflicto armado. Asimismo, durante este año se registraron diversos eventos relacionados con sequías, inundaciones y deslizamientos de tierra, que ocasionaron la pérdida de enseres, cultivos de pan, animales de corral, entre otros bienes y servicios esenciales en las comunidades indígenas y afrodescendientes. (OCHA, Colombia: Briefing Departamental, Chocó, 2025)

En el Chocó, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias Alertas Tempranas que advierten sobre los riesgos de trata de personas y reclutamiento ilícito, dada la compleja situación de violencia y presencia de grupos armados ilegales en la región.

Aunque no todas las alertas se centran exclusivamente en trata y reclutamiento, sí señalan factores de riesgo y dinámicas territoriales que favorecen estos delitos. Algunas alertas relevantes para el Chocó que mencionan o implican estos riesgos son:



- Alerta Temprana N° 024-24 para Quibdó: esta alerta de inminencia advierte sobre la disputa armada entre facciones disidentes de las antiguas FARC-EP y el ELN, con efectos indiscriminados sobre la población civil, especialmente en el ámbito rural. 1 Este contexto de conflicto armado es un factor de riesgo conocido para el reclutamiento ilícito de menores y la trata de personas.

- Alerta Temprana N° 009-2024 para los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí: esta alerta señala el riesgo de vulneraciones a los derechos de la población civil debido a las disputas entre grupos armados, lo que indirectamente puede aumentar la vulnerabilidad a la trata y el reclutamiento.

Alerta Temprana N° 014-23 para Necoclí, Turbo (Antioquia); Acandí, Juradó, Unguía (Chocó): esta alerta menciona la presencia y accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en los municipios advertidos, lo que puede generar riesgos de reclutamiento y otras formas de violencia que incrementan la vulnerabilidad a la trata.

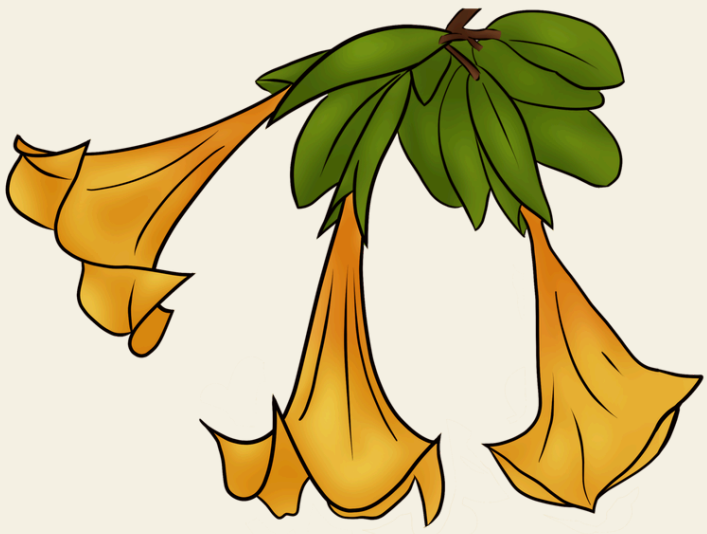
Alerta Temprana N° 049-19 (diciembre 2019) para zonas rurales y urbanas de Quibdó: esta alerta, con su informe de seguimiento, advierte sobre los riesgos provenientes del accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Si bien no se enfoca exclusivamente en trata y reclutamiento, la presencia y disputa territorial entre estos grupos genera un contexto de vulnerabilidad que puede ser aprovechado por redes de trata y para el reclutamiento de jóvenes.

A pesar de la alta vulnerabilidad a la trata en el Pacífico colombiano, las sentencias condenatorias son escasas debido a la limitada presencia y capacitación judicial, la desconfianza ciudadana en las instituciones y el difícil acceso a servicios legales. No obstante, dos sentencias, aunque no se refieren explícitamente a la trata, evidencian problemáticas estrechamente ligadas a sus fines de explotación sexual y trabajos forzados: la explotación, la vulneración de derechos humanos, el conflicto armado y la minería ilegal.



La **Sentencia C-270** de 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica por la Operación Génesis, responsabilizó al Estado colombiano por no garantizar **los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente** de estas comunidades ante la incursión de grupos armados ilegales. Si bien no menciona la trata, la sentencia subraya la responsabilidad estatal por las violaciones de derechos de las comunidades desplazadas, resaltando sus derechos fundamentales. El desplazamiento forzado resultante de la Operación Génesis creó un ambiente de vulnerabilidad que expuso a muchas personas, especialmente mujeres y niños, a tratantes que se aprovecharon de su situación para la explotación sexual o laboral. La ausencia estatal y la desprotección de las víctimas fomentaron la acción de redes criminales. Las comunidades desplazadas, tras perder sus tierras, se encontraron aún más desprotegidas por la falta de seguridad, la desestructuración social y la carencia de recursos básicos.

La **Sentencia T-622** de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, sobre las afectaciones a la salud de comunidades étnicas por la minería ilegal en la cuenca del río Atrato, evidenció la extrema pobreza y exclusión social que sufren las comunidades afrocolombianas e indígenas del Chocó. Esta vulnerabilidad económica y social facilita la explotación por parte de grupos ilegales que utilizan mano de obra forzada en condiciones de esclavitud en la minería y la explotación forestal. La sentencia también señala cómo la falta de empleo y de grupos ilegales que utilizan mano de obra forzada en condiciones de esclavitud en



la minería y la explotación forestal. La sentencia también señala cómo la falta de empleo y actividades productivas ha llevado a la prostitución como actividad de subsistencia en la región. La minería ilegal transforma los medios de vida tradicionales, generando prostitución y exponiendo a las mujeres a la explotación sexual por parte de trabajadores de las minas y grupos armados, lo que conlleva embarazos no deseados en adolescentes. La falta de protección obliga a hombres, mujeres y especialmente niños a entornos donde la explotación se convierte en la única forma de sustento en la minería ilegal y la agricultura.



Ante la falta de empleo y de actividades productivas los modos de vida de las comunidades están cambiando y la prostitución ha tomado mucha fuerza en la región como actividad de subsistencia. (pág. 119)

Muchos de los cambios inducidos en la región por el auge indiscriminado de la minería y la forestería ilegal o a gran escala, transforman los medios de vida tradicionales y locales de las comunidades que allí habitan. Inflación de precios, nuevos oficios, adquisición de tierras, prostitución, cambios en patrones de consumo, etc. Son algunos de los cambios que no son adecuadamente valorados en estudios ambientales. (pág. 121)

La realización de actividades mineras ilegales tienen un fuerte impacto en las comunidades étnicas en la medida en que generan desplazamiento, incremento de la deserción escolar, altos índices de prostitución y en general atenta contra las formas tradicionales de vida de las comunidades al no respetar ni permitir el desarrollo de actividades ancestrales de subsistencia como la agricultura (siembra de plátano y pancoger) y la minería artesanal (barequeo), y por el contrario impone un único modo de sustento: la minería mecanizada (pág. 142)

La actividad minera ilegal es sumamente compleja en la medida en que conjuga varios factores a un mismo tiempo: pobreza, falta de oportunidades, desigualdad, prostitución, ilegalidad, violencia, actores armados, posconflicto, por nombrar solo algunos. (pág. 146) (Corte Constitucional de Colombia, 2016)

La explotación infantil para el trabajo forzado es una clara manifestación de trata. La falta de acceso a educación y salud hace que los niños de estas comunidades sean particularmente vulnerables a la explotación. Todas estas problemáticas han provocado desplazamientos forzados, aumentando la vulnerabilidad al reclutamiento y la trata para trabajos en condiciones de explotación.



3.4. Valle del Cauca

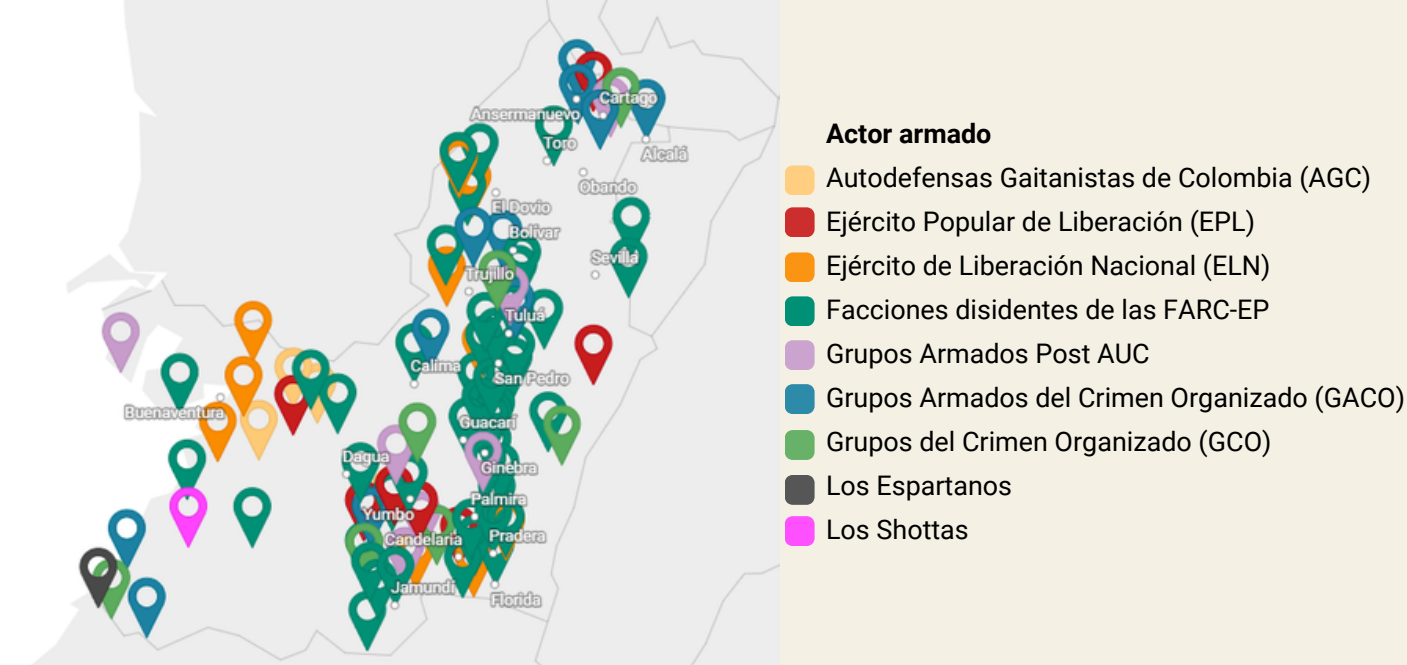
El departamento del Valle del Cauca enfrenta múltiples desafíos humanitarios, donde el conflicto armado y las emergencias desempeñan un papel crucial. Estas situaciones impactan de manera desproporcionada a comunidades étnicas, líderes y lideresas comunitarios, niños, niñas, adolescentes y mujeres en varios municipios como Buenaventura, Dagua, El Dovio, Florida, Jamundí, Palmira, Pradera y Tuluá. La presencia de los GANE en el territorio podría generar y mantener el aumento en el reclutamiento, uso y utilización de la niñez en el marco del conflicto armado. (OCHA, 2024)

Hemos escuchado que las niñas y adolescentes tienen relaciones con las personas que están dentro de los grupos armados, en el caso de los niños o de los adolescentes es más como hacia utilizar los niños como campaneros, como mandaderos y también sería como el trabajo, pero para los niños más chiquitos, esto creería yo según lo que hemos analizado y lo que nos dicen los demás niños.[5]

Para el periodo 2023-2024, las facciones disidentes de las FARC-EP son el grupo con mayor presencia en el Valle del Cauca, operando en 23 municipios, más de la mitad del departamento. Buenaventura es el municipio más afectado, con 16 reportes (Observatorio para la Paz del Valle del Cauca) que identifican la presencia de nueve actores armados. Le sigue Cali, con nueve reportes de actividad armada de siete grupos distintos y Tuluá con cinco reportes asociados a cinco grupos. (Gobernación del Valle del Cauca, 2024)

5 Fragmento tomado de la "Entrevista 01".

Imagen 2. Actores armados ilegales en el Valle del Cauca, 2023-2024



Presencia de actores armados ilegales en Valle del Cauca 2023-2024: https://datawrapper.dwcdn.net/dWpwY/4/

Este departamento ha registrado un preocupante aumento en los casos de trata de personas en los últimos años, una tendencia que refleja la situación nacional. Según datos del Ministerio del Interior, de los casos reportados hasta junio de 2024, 113 corresponden a esta región. (Infobae, julio de 2024).

El Valle del Cauca se ha convertido en un departamento de origen de víctimas de trata más que destino, siendo las mujeres jóvenes y adolescentes las principales afectadas: más del 20 % de los habitantes del Valle tienen entre 14 y 26 años. Esta es la edad en que muchas personas inician su búsqueda laboral y explica cómo la mayoría de ellas son engañadas con ofertas laborales en el extranjero que, una vez fuera del país, se convierten en explotación sexual-prostitución forzada.

Las comunidades rurales y de bajos recursos son particularmente vulnerables, ya que las redes de trata aprovechan su situación económica para atraerlas con promesas de una vida mejor. Dentro de este grupo vulnerable también se encuentran hombres de entre 17 y 29 años, personas LGBTIQ+, madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado, quienes se ven especialmente expuestos a ser captados y explotados por estas redes. (El Tiempo, 2024)



Algunos titulares noticiosos ejemplifican la gravedad de esta situación:

- *“Así funcionaba la red que llevaba mujeres desde Cali a España con falsas promesas de trabajo para prostituirlas”. (Infobae, 2024)*
- *“Condenan a alias Lorena, cabecilla de red dedicada a la trata de personas. La mujer llevaba a engañadas a mujeres del Eje Cafetero y Valle del Cauca con falsas ofertas laborales en China.” (RCN Radio, 2023)*
- *“Detienen en Pereira a tres integrantes de red de trata de mujeres a Italia”. (Infobae, 2024)*

Cali, Buenaventura, Cartago, Tuluá, Buga y Palmira son los municipios del departamento más afectados por la trata de personas: no son solo puntos de origen de las víctimas, sino que también albergan redes de trata que operan dentro de la región, captando mujeres para ser trasladadas al extranjero o en menor medida, explotándolas dentro del mismo territorio:

Con falsas promesas de trabajo, los capturados engañaban a mujeres de escasos recursos de los municipios de Dosquebradas, La Virginia, Cartago y Tuluá, las llevaban a países como Panamá, Singapur y China y en esos lugares las explotaban sexualmente con el pretexto de que las jóvenes debían pagar una deuda, que día a día aumentaba, por concepto de tiquetes aéreos, alimentación y estadía; así las cosas, según denunciaron varias mujeres que lograron escapar de sus captores, eran sometidas a largas jornadas ejerciendo la prostitución. (Caracol Radio, 2021)

La situación que enfrenta Cali necesita un énfasis particular, ya que es la ciudad con el mayor número de casos en el departamento. Aquí, se ha denunciado la existencia de una especie de bolsa de empleo operada por grupos armados (entre ellos, el Clan del Golfo), que se dedica activamente al reclutamiento y explotación de víctimas. (El Tiempo, 2024)



La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos de trata de personas y reclutamiento forzado en el departamento, por medio de varias Alertas Tempranas:

- Alerta Temprana N° 002-25 para Florida y Pradera: esta alerta advierte sobre el riesgo generado por el accionar de dos grupos armados ilegales que operan en la zona, configurándose un escenario de disputa territorial. Este contexto de conflicto puede aumentar la vulnerabilidad de la población al reclutamiento y a la trata.

- Alerta Temprana N° 005-24 para Jamundí: esta alerta de inminencia señala el riesgo de afectación de los derechos de la población residente y en tránsito debido al control territorial de un grupo armado ilegal. Esta situación puede generar riesgos de reclutamiento y otras formas de violencia que incrementan la vulnerabilidad a la trata.

- Alerta Temprana N° 039-2023 para Buenaventura: esta alerta es integral y analiza diversos factores de riesgo en el distrito de Buenaventura, incluyendo la presencia de grupos armados ilegales y crimen organizado. Si bien no se centra exclusivamente en trata y reclutamiento, la compleja dinámica de violencia y la presencia de economías ilegales en Buenaventura son factores que pueden aumentar la vulnerabilidad a estos delitos. La alerta menciona la presencia de grupos como las AGC y bandas de crimen organizado local y transnacional, lo que puede influir en la trata y el reclutamiento.

- Alerta Temprana N° 019-21 para Guadalajara de Buga, Palmira y El Cerrito: aunque emitida hace algunos años, esta alerta advertía sobre riesgos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales y su impacto en la población, lo que indirectamente podría generar vulnerabilidad a la trata y el reclutamiento en estos municipios

En la región Pacífica colombiana, la explotación sexual es la forma más común de trata de personas, como lo demuestran varios casos judiciales con sentencias condenatorias:[6]

6 Los casos reportados han sido recabados de SHERLOC (Sharing Electronic Resources and Laws on Crime), una plataforma de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que proporciona información sobre la legislación, casos judiciales y otros recursos relacionados con la delincuencia organizada transnacional, incluyendo la trata de personas. SHERLOC tiene como objetivo facilitar la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos para combatir estas formas de criminalidad.

- En agosto de 2016, Gloria Mercedes Hoyos Llanos y Ana Rosa Arbeláez fueron condenadas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga por trata y tortura con fines de explotación sexual, recibiendo una pena de más de 8 años y multas significativas.

- Otro caso en julio de 2016 involucró a Luz Stella Beltrán Arcila, condenada por el mismo Juzgado de Buga por trata con fines de explotación sexual, lavado de activos y concierto para delinquir agravado, con una pena de 4 años, compensación a la víctima y multa.

- En junio de 2016, Ana Rosa Arbeláez Muñoz fue condenada en Buga por trata con fines de explotación sexual y concierto para delinquir, recibiendo una pena de 3 años y medio y una multa.

- En mayo de 2016, Luz Miriam Cruz y Eunice Hernández Cruz fueron condenadas en Buga por trata con fines de explotación sexual, con penas de 13 y 6 años respectivamente, además de multas.

- Marzo de 2016 registró la condena de Exmisilbana Calle Collazos en Buga por trata con fines de explotación sexual, lavado de activos y concierto para delinquir agravado, con una pena de casi 12 años y una considerable multa.

- Finalmente, en septiembre de 2013, Gloria Patricia y Ángela María Velásquez Quintero fueron condenadas en Buga a 9 años cada una por trata con fines de explotación sexual, además de multas.

La mendicidad forzada y la servidumbre son otras finalidades de la trata en esta región. El testimonio de un funcionario de una organización de la sociedad civil que trabaja con comunidades indígenas en el Pacífico colombiano señala cómo la falta de empleo lleva a algunos indígenas a mendigar en centros urbanos, lo que puede ser una forma de explotación por redes de trata.

Lo anterior refleja cómo ciertas prácticas se han naturalizado, lo que contribuye a la invisibilización del delito. Aquello que parece una estrategia de sobrevivencia es, en realidad, una forma de explotación utilizada por redes de trata de personas.

Como para el tema de la mendicidad, la servidumbre, o sea, el tema del desempleo es una cuestión aquí que no hay justificación obviamente, pero es lo que hace que algunas personas sientan que es como la forma para ganar dinero e irse a parar al centro. Eso, sobre todo se evidencia en las personas indígenas… La población indígena que están casi todo el tipo en el centro y están los niños pidiendo, eh, digamos, comida, dinero […][7]



3.5. Cauca

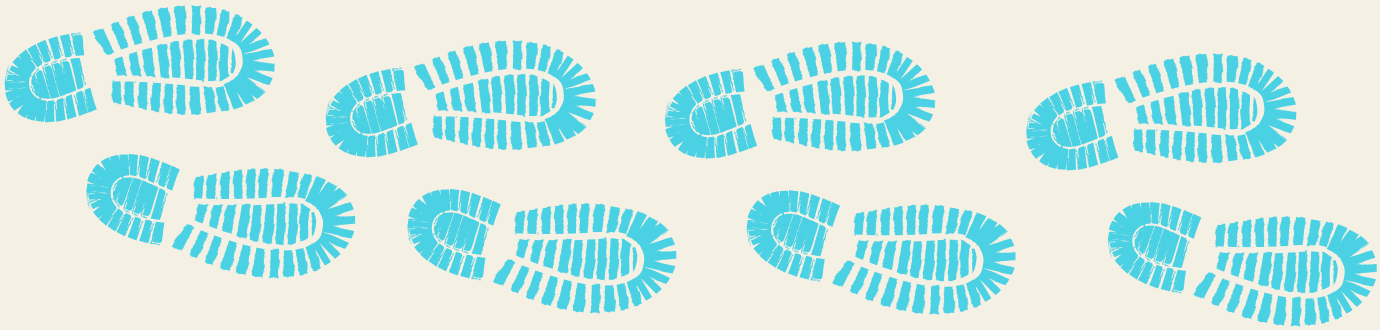
El departamento del Cauca se encuentra ubicado al suroccidente del país, entre las regiones andina y pacífica. Dentro de sus límites están el Valle del Cauca y Tolima al norte, Huila y Caquetá al oriente, Nariño y Putumayo al sur y el Océano Pacífico al occidente. El Departamento, que comprende 42 municipios, abarca el 2,5% del territorio nacional. Cuenta con una importante variedad de recursos, bosques, costa sobre el Pacífico, tres regiones naturales, tres valles y cinco grandes cuencas hidrográficas: Alto Cauca, Pacífico, Alto Magdalena, Patía y Caquetá. Su economía está basada principalmente en la producción agrícola, especialmente de fique, caña de azúcar, caña panelera, café, papa, maíz, yuca, frijol, tomate, mora y espárragos. Es también muy importante la ganadería y sus derivaciones de productos cárnicos y lácteos.

7 Fragmento tomado de la "Entrevista 01".

El departamento del Cauca se encuentra sumido en una compleja crisis humanitaria, exacerbada por la triple afectación del conflicto armado, la migración y los desastres naturales. La presencia y accionar de Grupos Armados No Estatales (GANE), como disidencias de las FARC, el ELN y grupos paramilitares, que se disputan el control territorial, de las comunidades y de las rentas ilícitas, ha generado un sinnúmero de emergencias humanitarias, especialmente en municipios como Argelia, Balboa y López de Micay.

La imposición de normas de conducta, las restricciones a la movilidad y las limitaciones de acceso impuestas por los GANE han afectado gravemente a la población civil. El Cauca no solo es un corredor de tránsito para población refugiada y migrante, sino también un territorio de destino, lo que agrava aún más la situación. Los riesgos que enfrenta esta población son alarmantes, incluyendo el rapto de niños y niñas menores de cinco años, la violencia sexual y de género, la trata de personas, la utilización y vinculación al microtráfico, las agresiones físicas y las amenazas directas por parte de los GANE, que a menudo resultan en desplazamientos masivos e individuales.





La ya difícil situación, se suman los desastres naturales que han afectado a miles de personas y han destruido viviendas, acueductos, escuelas y cultivos, impactando negativamente en las actividades económicas de los campesinos de la región. La situación se ha agudizado aún más debido a las continuas acciones armadas de los GANE, especialmente en los municipios del Cañón del Micay (Argelia, El Tambo y López de Micay). A pesar de las operaciones militares iniciadas en agosto de 2023 para restablecer el control del territorio, la situación de seguridad en la zona no se ha estabilizado. Los combates constantes en Argelia han provocado emergencias masivas como confinamientos y desplazamientos, afectando a miles de personas. Las jornadas académicas han sido suspendidas por temor a que los niños, niñas y adolescentes queden atrapados en medio de los enfrentamientos y muchos docentes han sido desplazados, afectando la educación en la región.

La contaminación por minas antipersonal (MAP) es otro factor de gran preocupación, ya que representa un grave riesgo para la población. En las zonas rurales y dispersas del departamento, el riesgo de reclutamiento, uso, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes por parte de los GANE es alarmante. A pesar de las cifras oficiales, se presume que existe un subregistro debido al temor a denunciar, lo que dificulta la visibilización de esta problemática.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar el acuerdo de paz y fortalecer la presencia del Estado en la región, la violencia persiste y los derechos humanos siguen siendo vulnerados de manera sistemática. La población civil, especialmente los líderes sociales, indígenas y campesinos, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y requiere protección urgente.

Los territorios del norte del Cauca —en donde las infancias son consideradas semillas para el futuro del pueblo indígena nasa— se han convertido en uno de los principales sitios de donde los grupos armados extraen y reclutan niños para la guerra. Entre enero del 2017 y abril del 2024, al menos 817 niños y adolescentes indígenas nasa han sido forzados a formar parte de las filas del conflicto armado, según reportó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). (Mongabay, 2024)

Sin embargo, los niños y adolescentes no son utilizados para acciones de guerra en esos mismos territorios, sino que son llevados al sur del departamento del Cauca, así como hacia el occidente del departamento de Nariño, el occidente del Huila y las tierras altas del Putumayo, sostiene la ACIN.

A inicios de junio del 2024, la Defensoría del Pueblo emitió el informe Los contrastes de la realidad humanitaria: un país que busca la paz, a partir de información obtenida desde el 2017 a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la estrategia de prevención más importante del Estado colombiano.

El documento expone que, en los últimos siete años —con corte al 31 de diciembre del 2023 — se registraron **261 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes** en todo el departamento del Cauca, reconociendo que existe un alto nivel de subregistro.

El reclutamiento se da en un contexto de carencias económicas, educativas y afectivas y, por ello, la estrategia de los grupos armados ha sido acercarse a los niños y adolescentes más vulnerables en el territorio. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) Çxhab Wala Kiwe —“Territorio del gran pueblo”, en español— señala directamente como responsables a los actores armados que hacen parte del Estado Mayor Central de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre los señalados también está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional del (ELN).

Los mecanismos de reclutamiento de los grupos armados consisten en otorgar recompensas a la comunidad por mandados o favores; enamorar a las niñas y a las mujeres en espacios sociales como fiestas, ferias o eventos deportivos; crear supuestas amistades o emplearlos como campaneros o vendedores de sustancias psicoactivas. También hay casos de menores de edad adoctrinados para volver a las escuelas y convencer a sus compañeros de sumarse a las filas de la guerra.

Tanto la población migrante como los indígenas enfrentan discriminación y exclusión en varios aspectos de la sociedad, lo que dificulta su integración y acceso a servicios básicos.

La trata de personas se centra principalmente en la explotación sexual y el trabajo forzado, afectando especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes. La lentitud del sistema judicial, debido a su sobrecarga, disminuye la efectividad de las sentencias.

Un caso ilustrativo, ocurrido en agosto de 2018, involucró a las menores YMBV (15 años) y YESR, quienes fueron engañadas por María Yuleidi Pino Trullo. Inicialmente, las jóvenes fueron explotadas laboralmente en un bar de Balboa (Cauca) y luego sexualmente en la frontera con Ecuador. Por estos hechos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala de Decisión Penal, condenó a María Yuleidi Pino Trullo a 25 años de prisión por trata de personas agravado y proxenetismo con menor de edad, además de imponerle una multa significativa al Estado. (Corte Suprema de Justicia, 2018)



3.6. Nariño

El departamento de Nariño está ubicado en el suroccidente de Colombia sobre la frontera con Ecuador, limita al norte con el departamento del Cauca y al oriente con el departamento de Putumayo; su territorio representa el 2,98 % del territorio nacional y cuenta con 64 municipios, distribuidos en 13 subregiones. Nariño es un departamento multiétnico y pluricultural, se reconocen 7 pueblos indígenas, 75 consejos comunitarios de población afrodescendiente (23 en proceso de formalización), pueblo Rrom gitano, campesinas y mestizas.

El departamento de Nariño enfrenta una creciente crisis humanitaria debido al aumento progresivo de desplazamientos masivos en los últimos años. Las cifras de personas desplazadas se han incrementado de manera alarmante, pasando de poco más de 10 mil en 2020 a casi 35 mil en 2022, con una leve disminución en 2023, alcanzando las 31 mil personas. (OCHA, 2023)

Esta situación afecta de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes e indígenas Awá y Eperara Siapidara, quienes habitan en municipios como Ricaurte, Santacruz, Samaniego, Magüí Payán, Tumaco, Roberto Payán y Olaya Herrera, entre otros. Los desplazamientos masivos, en muchos casos, son continuos y prolongados, extendiéndose por semanas e incluso meses, lo que dificulta la capacidad de respuesta de las instituciones.





Además, se han reportado retornos sin el acompañamiento adecuado y sin las condiciones de seguridad necesarias, lo que aumenta el riesgo de revictimización para estas comunidades. Existe un subregistro de eventos y víctimas en el marco del conflicto armado, debido al desconocimiento de las rutas de atención y al temor a posibles represalias por parte de los Grupos Armados No Estatales (GANE).

La Defensoría del Pueblo ha emitido 15 Alertas Tempranas entre 2020 y 2023, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta la población en Nariño. En 2023, se emitieron dos Alertas de Inminencia para varios municipios, alertando sobre riesgos de desplazamiento, confinamiento, amenazas individuales y colectivas, restricciones a la movilidad, retenes ilegales, homicidios selectivos, violencias basadas en género, accidentes con minas antipersonal y municiones sin explosionar (MAP/MSE), y reclutamiento, uso y utilización de menores ante la presencia e incursión de los GANE.

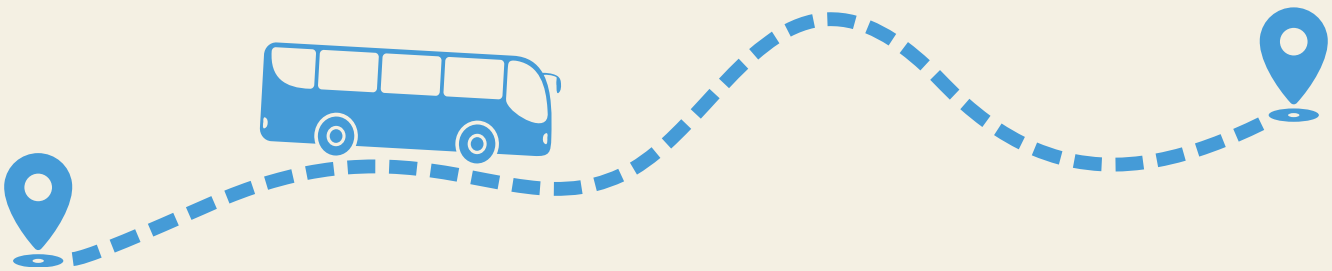
La situación humanitaria en Nariño tiende a agudizarse debido a factores estructurales y coyunturales. Se presentan emergencias por variabilidad climática, desplazamientos masivos y confinamientos de manera recurrente, sumado a la crisis en la comercialización de la coca y la seguridad alimentaria. Los territorios de difícil acceso por falta de vías de comunicación y las altas necesidades básicas insatisfechas dificultan el acceso de las comunidades a procesos productivos, alimentos, agua segura, educación, salud y protección.

Esta región se ha convertido en un punto estratégico para las redes de trata de personas. El delito afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables, fácilmente captadas por la pobreza, la falta de oportunidades y la discriminación social, características comunes en las zonas rurales e indígenas del departamento.

Nariño no solo es un lugar de origen de víctimas de trata, sino también un punto clave de tránsito y destino para las víctimas de trata de personas: captadas en diversas regiones de Colombia, provienen también de países vecinos como Ecuador y Perú. La cercanía de Nariño a la frontera con Ecuador y su acceso al océano Pacífico facilitan el traslado de las personas, consolidando la región como un importante corredor transnacional. Según reportes de las autoridades, los municipios de Ipiales y Tumaco han sido identificados como algunas de las zonas más afectadas, donde operan redes criminales que captan principalmente a mujeres y adolescentes con promesas de trabajo, para explotarlas sexualmente o para someterlas a condiciones de servidumbre.

Es común que las ofertas laborales estén dirigidas a otros países u otras ciudades colombianas; sin embargo, al llegar a sus destinos, muchas personas descubren que son forzadas a trabajar en bares, clubes nocturnos o incluso a mantener relaciones sexuales con miembros de grupos armados ilegales:

> *Los presuntos integrantes de la red de trata de personas estarían vinculados en la captación, traslado y sometimiento de mujeres, quienes eran obligadas a mantener relaciones sexuales con miembros de las disidencias de las Farc que frecuentaban un bar del municipio nariñense. (Infobae, 2023)*



Las redes de trata en Nariño no solo se limitan al ámbito local, sino que tienen conexiones internacionales, particularmente con Perú y Ecuador, utilizando las rutas fronterizas para transportar a las víctimas. Por ejemplo, se ha documentado cómo mujeres de comunidades indígenas son llevadas desde municipios como Puerto Nariño hacia ciudades como Iquitos y Pucallpa, en Perú, donde son sometidas a explotación sexual, trabajos y servicios forzados. Esta situación llevó a un operativo conjunto entre Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia para desarticular la red de trata que operaba en el Amazonas. (La Vanguardia, 2019)

Una persona entrevistada para esta investigación, especialista en el tema en el departamento, revela que hay una estructura compleja y transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual, en la que Tumaco actúa como punto de captación y tránsito dentro de una red criminal bien organizada. El hecho de que la mayoría de las mujeres encontradas en un burdel fueran colombianas, y específicamente del Eje Cafetero (Manizales, Chinchiná, Armenia, Santa Rosa de Cabal), indica que el reclutamiento no se limita a zonas de frontera, sino que alcanza regiones del interior del país. La conexión entre el Eje Cafetero y Tumaco, y de ahí hacia Esmeraldas (Ecuador), sugiere la existencia de un "cordón" de movilidad de las víctimas que atraviesa regiones vulnerables y con escasa presencia estatal.



En un burdel había 25 chicas de las 25, 20 eran colombianas y de las 20 colombianas, la mayoría eran del Eje cafetero, en especial de Manizales, de Chinchiná, de Armenia y de Santa Rosa de Cabal [...] Mirábamos que había un reclutamiento muy fuerte. Estas chicas colombianas habían sido captadas en Tumaco, entonces no se daba cuenta que había un cordón y un nexo fuerte en la zona pacífica de frontera entre Tumaco y Esmeraldas[...] muchas firmaban letras de cambio en blanco para que luego su tratante, o como lo queramos llamar, para su proxeneta, le coloca el valor que él le quiera colocar para que pague a través de su trabajo una cifra que no la iba a pagar nunca en su vida. Entonces es poco complejo el tema del panorama de Tumaco y de la zona costera.[8]

8 Fragmento tomado de la "Entrevista 06".

También se revelan dinámicas cambiantes en los contextos de explotación sexual vinculados a la migración y la trata de personas. En 2019, se evidenció una transformación significativa en la composición de los llamados "clubes migratorios mixtos", con un aumento en la presencia de mujeres venezolanas que desplazaron a mujeres colombianas y ecuatorianas. Este cambio puede estar relacionado con la crisis migratoria venezolana, que ha generado una alta vulnerabilidad entre las mujeres de ese país, convirtiéndolas en blanco principal de redes de captación y explotación.



En 2019, la composición de clubes migratorios mixtos cambió significativamente. Se observa un aumento en la presencia de mujeres venezolanas, desplazando a colombianas y ecuatorianas. Las venezolanas recibían pagos diferentes, superiores a los de otras nacionalidades, según relatos de las propias mujeres.[9]

La situación se agudiza porque la trata de personas ha comenzado a naturalizarse en algunas comunidades, especialmente en zonas donde las redes han operado durante años: las víctimas no se reconocen como tales y las promesas de una vida mejor se disfrazan bajo la apariencia de oportunidades. Incluso, hay reportes de matrimonios tempranos o uniones forzadas, como si fueran prácticas aceptadas o normales dentro de ciertas comunidades, cuando en realidad son mecanismos de control de las redes de trata:



Lo más fuerte es eso, la naturalización, que muchas comunidades sienten que eso ya no es un delito, lo han incorporado en sus prácticas y eso no puede ser así. Entonces se ha hablado ya de matrimonios y uniones tempranas con niños y eso no puede ocurrir.[10]

Otro aspecto importante es el uso de amenazas de muerte como método de control, junto con la manipulación mediante trabajo espiritual o magia para atemorizar a las víctimas y asegurar su sumisión. La red desmantelada operaba en ciudades como Calarcá (Quindío) y Bogotá, teniendo su núcleo de influencia en Ipiales (Nariño):

9 Fragmento tomado de la "Entrevista 06".
10 Fragmento tomado de la "Entrevista 06".

Una poderosa red de tráfico de personas y explotación sexual, con prácticas que resultaban macabras, fue descubierta por la Policía, que capturó a nueve de sus presuntos integrantes. La investigación señala que la red perfilaba a sus víctimas, quienes por lo general eran mujeres que se encontraban en estado de vulneración económica, y les ofrecían trabajos llamativos. Luego de convencerlas, se las llevaban a zona de frontera entre Colombia y Ecuador, donde eran explotadas sexualmente. (…) los agentes de la Dijín encontraron que las personas a cargo de la red amenazaban a sus víctimas con hacerles rezos y brujería a ellas y sus familias si no cumplían con lo ordenado. (Semana, 2021)

Una vez contextualizada la compleja realidad socioeconómica, ambiental y cultural del Pacífico colombiano y cómo diversos factores como el turismo, el cambio climático y la pandemia han exacerbado la vulnerabilidad, es fundamental examinar la intrínseca relación entre la trata de personas, el narcotráfico y el conflicto armado en esta región.





4.NARCOTRÁFICO, CONFLICTO ARMADO Y TRATA DE PERSONAS



La región Pacífica colombiana se ha visto históricamente afectada por las dinámicas del narcotráfico. Su ubicación estratégica, con extensas costas sobre el Océano Pacífico y la presencia de zonas selváticas y remotas, la han convertido en un corredor importante para el cultivo, procesamiento y tránsito de drogas ilícitas, principalmente cocaína. Este fenómeno ha tenido profundas implicaciones en el tejido social y económico de la región. La economía ilegal del narcotráfico ha generado circuitos de lavado de dinero, corrupción y ha alimentado la violencia ejercida por los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial para el desarrollo de estas actividades.

Las comunidades locales, especialmente aquellas en zonas rurales y de difícil acceso, a menudo se ven atrapadas en medio de estas dinámicas. La falta de oportunidades económicas alternativas y la presión de los grupos armados pueden llevar a la población a involucrarse en actividades relacionadas con el narcotráfico, ya sea en el cultivo de hoja de coca, el procesamiento o el transporte de la droga. La presencia del narcotráfico también ha exacerbado otros problemas sociales, como el desplazamiento forzado, la inseguridad, la presencia de minas antipersona y el uso, utilización y reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados. La lucha contra el narcotráfico por parte del Estado colombiano, a menudo con el apoyo de la comunidad internacional, ha generado operativos militares y policiales que también han tenido un impacto en la vida de las comunidades locales.

Es importante analizar cómo las rutas del narcotráfico y la presencia de economías ilícitas se entrelazan con el fenómeno de la trata de personas en la región, ya que estas dinámicas pueden crear contextos de vulnerabilidad y facilitar la captación y explotación de víctimas.

La presencia de estos actores transnacionales añade una capa de complejidad a la ya difícil situación delictiva en el Pacífico. Las autoridades deben lidiar con organizaciones con mayor capacidad económica, logística y de violencia. Estos grupos conectan el crimen local con redes internacionales, facilitando el flujo de drogas, armas y personas a través de las fronteras. Ambas presencias exacerban la violencia, la corrupción y la inseguridad en el Pacífico colombiano, representando un reto significativo para la estabilidad y el desarrollo de la región.

4.1. Conflicto armado y trata de personas

La región Pacífica colombiana ha sido históricamente escenario de un prolongado y complejo conflicto armado interno. La presencia de diversos actores armados ilegales, incluyendo guerrillas, paramilitares y bandas criminales post-desmovilización, se ha disputado el control territorial y los recursos naturales de la región durante décadas.

Esta confrontación armada ha tenido graves consecuencias humanitarias para la población civil. Las comunidades afrocolombianas e indígenas, que constituyen una parte significativa de la población del Pacífico, han sido particularmente afectadas por el desplazamiento forzado, las masacres, el uso, utilización y reclutamiento de menores de edad, la violencia sexual y la imposición de normas por parte de los actores armados. La lucha por el control de territorios estratégicos para el narcotráfico, la explotación minera ilegal y otras economías ilícitas ha sido uno de los principales motores del conflicto en la región. La presencia de estos actores armados ha generado un clima de inseguridad y zozobra, limitando el desarrollo económico y social de las comunidades y dificultando la presencia efectiva del Estado. Las dinámicas del conflicto armado también han tenido un impacto en la estructura social y las formas de organización de las comunidades. La imposición de normas y la violencia ejercida por los grupos armados han debilitado el tejido social y han generado desconfianza entre la población.

Es fundamental comprender cómo el contexto del conflicto armado en el Pacífico colombiano crea un ambiente de vulnerabilidad que puede ser aprovechado por los tratantes de personas. El desplazamiento forzado, la desintegración familiar y la falta de oportunidades generadas por el conflicto pueden aumentar el riesgo de ser víctimas de trata de personas.



La región Pacífica colombiana es un punto de confluencia de migración interna y desplazamiento forzado debido al conflicto armado y la violencia de grupos criminales. Los desplazados y migrantes, que suelen tener escaso acceso a servicios básicos y redes de apoyo, son especialmente vulnerables a caer en redes de explotación. A diferencia de zonas estudiadas como la frontera colombo-venezolana, donde la migración internacional ha sido ampliamente documentada, en el Pacífico colombiano se requiere una exploración de las formas en que el desplazamiento interno y las rutas migratorias afectan la trata de personas en esta región.

La violencia en el Pacífico es un fenómeno relativamente reciente: los grupos guerrilleros llegaron al Chocó, Buenaventura y Nariño hacia mediados de los 80 y los paramilitares en los 90. (International Crisis Group, 2019). Junto con los narcotraficantes, estos grupos compiten por el control territorial, buscan maximizar sus beneficios y, a menudo, proporcionar algún tipo de gobernanza. Aunque no dominan militarmente las áreas que ocupan, se disputan el territorio y ejercen una notable influencia sobre las comunidades locales. Incluso cuando las fuerzas del Estado intervienen, estos grupos se ocultan entre la población civil y amenazan con represalias una vez que las fuerzas estatales se retiran.



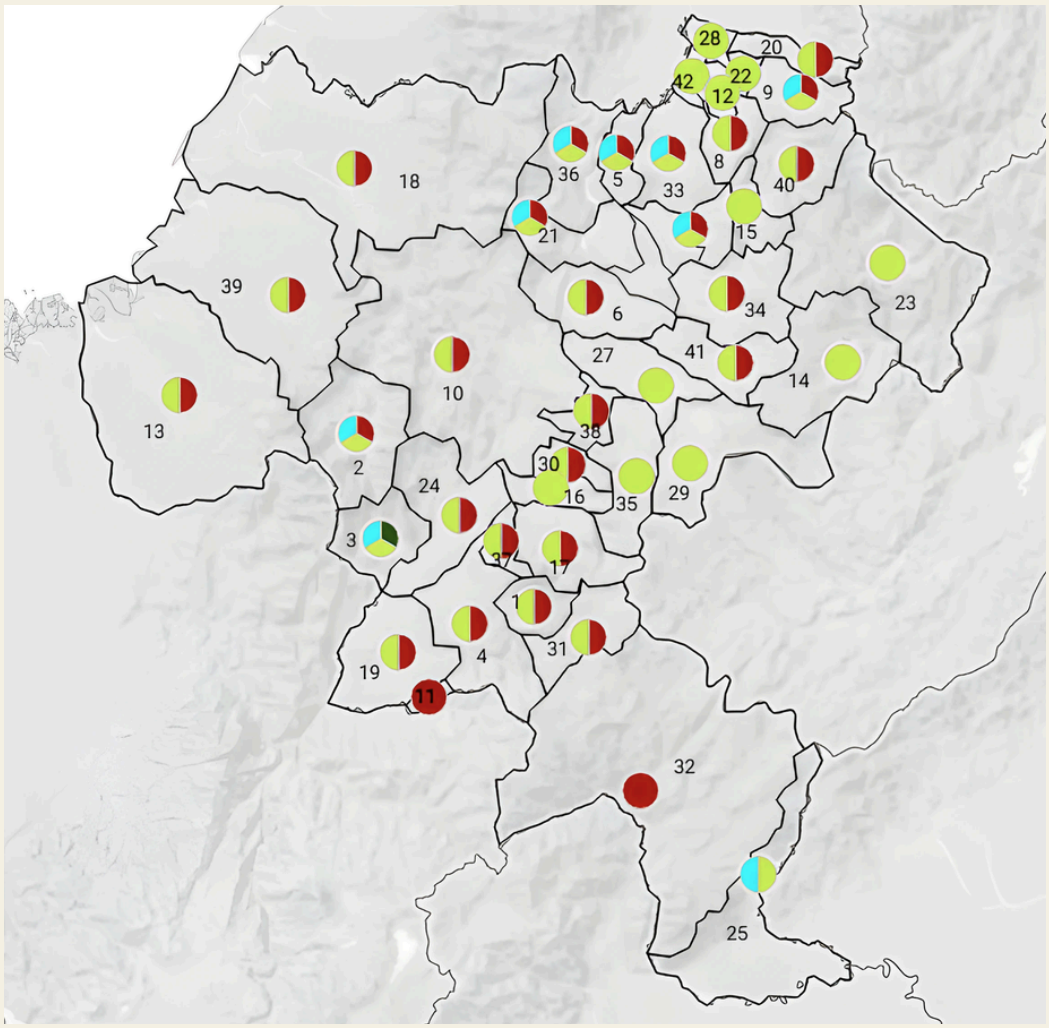
La presencia de grupos armados en la región ha sido un factor determinante en la dinámica del conflicto durante las últimas décadas. Comprender la evolución de su presencia, así como los factores que influyen en su expansión o repliegue, es fundamental para la construcción de paz y la protección de la población civil.

En el siguiente mapa se puede observar la presencia de grupos armados en la región pacífica a través de mapas elaborados por la Fundación Paz y reconciliación - PARES, que muestran la distribución y el tipo de grupos presentes en los diferentes territorios.

Imagen 3. Presencia de Estructuras Armadas Ilegales EAI en Cauca 2024

EMC	ELN	SM	EGC - Clan del Golfo
40 municipios	29 Municipios	9 Municipios	1 Municipios

EGC-Clan del Golfo: Ejercito Gaitanista de Colombia
ELN: Ejército de Liberación Nacional
EMC: Estado Mayor Central



1 ALMAGUER
2 ARGELIA
3 BABLOA
4 BOLIVAR
5 BUENOS AIRES
6 CAJIBIO
7 CALDONO
8 CALOTO
9 CORINTO
10 EL TAMBO
11 FLORENCIA
12 GUACHENE
13 GUAPI
14 INZA
15 JAMBALO
16 LA SIERRA
17 LA VEGA
18 LOPEZ DE MICAY
19 MERCADERES
20 MIRANDA
21 MORALES
22 PADILLA
23 PAEZ
24 PATIA
25 PAIMONTE
26 PIENDAMO - TUNIA
27 POPAYAN
28 PUERTO TEJADA
29 PURACE
30 ROSAS
31 SAN SEBASTIAN
32 SANTA ROSA
33 SANTANDER DE QUILCHAO
34 SILVIA
35 SOTARA PAISPAMBA
36 SUAREZ
37 SUCRE
38 TIMBIO
39 TIMBIQUI
40 TORIBIO
41 TOTORO
42 VILLA RICA

NOTA: Paz, postconflicto y derechos humanos:
https://www.pares.com.co/mapas/paz/posconflicto/derechos/humanos

Imagen 4. Presencia de Estructuras Armadas Ilegales EAI en Chocó 2022



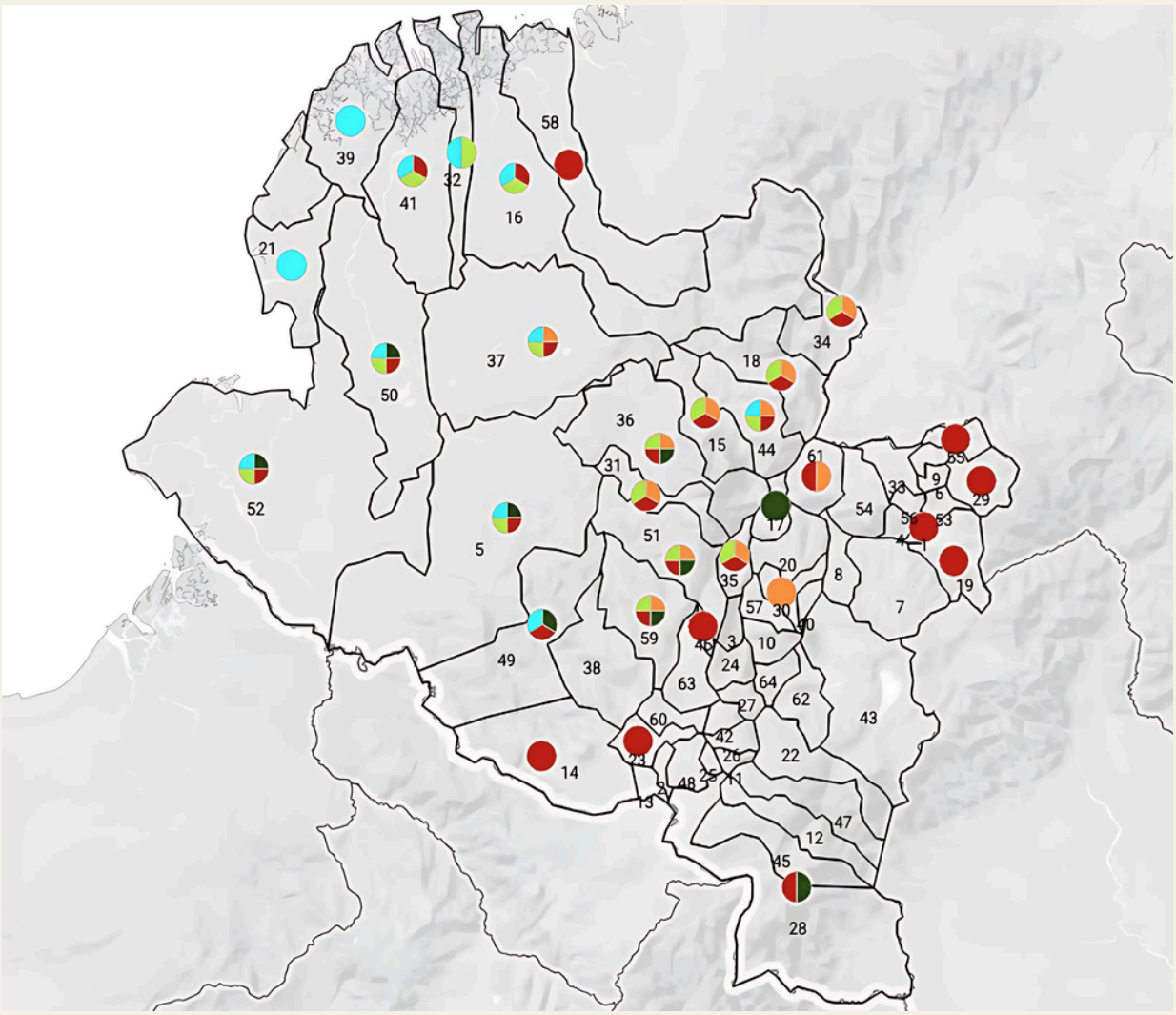
Rango Presencias	
Una presencia	
Presencia	***Municipios***
CLAN DEL GOLFO	*26*

NOTA: Paz, postconflicto y derechos humanos:
https://www.pares.com.co/mapas/paz/posconflicto/derechos/humanos

Imagen 5. Presencia de Estructuras Armadas Ilegales EAI en Nariño 2024

EMC	ELN	SM	EGC - Clan del Golfo	AUN
16 municipios	26 Municipios	11 Municipios	9 Municipios	12 Municipios

EGC-Clan del Golfo: Ejercito Gaitanista de Colombia
ELN: Ejército de Liberación Nacional
EMC: Estado Mayor Central
SM: Segunda Marquetalia
AUN: Autodefensas Unidas de Nariño

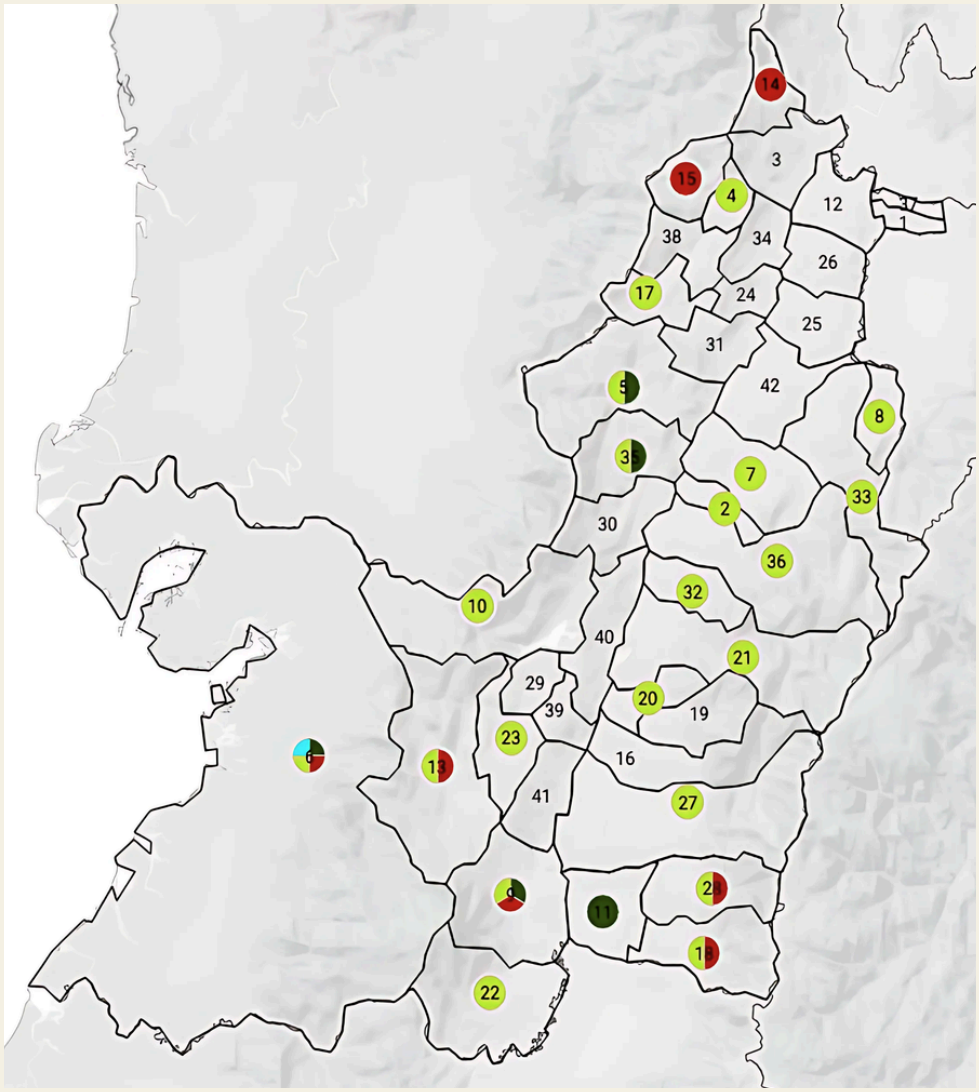


NOTA: Paz, postconflicto y derechos humanos:
https://www.pares.com.co/mapas/paz/posconflicto/derechos/humanos

Imagen 6. Presencia de Estructuras Armadas Ilegales EAI en Valle del Cauca 2024

EMC	ELN	SM	EGC - Clan del Golfo
21 municipios	7 Municipios	1 Municipios	5 Municipios

EGC-Clan del Golfo: Ejercito Gaitanista de Colombia
ELN: Ejército de Liberación Nacional
EMC: Estado Mayor Central
SM: Segunda Marquetalia



NOTA: Paz, postconflicto y derechos humanos:
https://www.pares.com.co/mapas/paz/posconflicto/derechos/humanos

1 ALCALA
2 ANDALUCIA
3 ANSERMANUEVO
4 ARGELIA
5 BOLIVAR
6 BUENAVENTURA
7 BUGALAGRANDE
8 CAICEDONIA
9 CALI
10 CALIMA
11 CANDELARIA
12 CARTAGO
13 DAGUA
14 EL AGUILA
15 EL CAIRO
16 EL CERRITO
17 EL DOVIO
18 FLORIDA
19 GINEBRA
20 GUACARI
21 GUADALAJARA DE BUGA
22 JAMUNDI
23 LA CUMBRE
24 LA UNION
25 LA VICTORIA
26 OBANDO
27 PALMIRA
28 PRADERA
29 RESTREPO
30 RIOFRIO
31 ROLDANILLO
32 SAB PEDRO
33 SEVILLA
34 TORO
35 TRUJILLO
36 TULUA
37 ULLOA
38 VERSALLES
39 VIJES
40 YOTOCO
41 YUMBO
42 ZARZAL

En Buenaventura, hay un conflicto social que no se ha resuelto. Detrás del conflicto histórico se arrastra un conflicto social sin resolver. Las estructuras armadas (que vienen desde el año 2000), tienen 1700 chicos en la estructura; son niños reclutados por otros niños, porque el grupo le da oportunidad que no le da el Estado. […] ¿Por qué no se intervienen esos grupos?

El narcotráfico ha sido muy fuerte. Los jóvenes construyeron la idea del dinero fácil…, entonces se van construyendo ideologías equivocas, que van haciendo que los jóvenes se vayan vinculando a la práctica de actividades ilícitas que desdibujan esa percepción que trabajar con el sudor de la frente es menos rentable, pese a que saben que pueden perder la vida, ser presos, que dejan dolor en la familia (ausencia).

Corporación Memoria y Paz -CORMEPAZ, Buenaventura, 7 julio 2023

Tumaco, estratégicamente ubicada en la región Pacífica colombiana y con alta concentración de cultivos de coca, es un punto clave para el narcotráfico. La presencia de actores criminales transnacionales como el cartel de Sinaloa y grupos colombianos como "los Chires" evidencia la conexión entre economías ilegales locales y el tráfico de drogas hacia Panamá y Estados Unidos. Además, la operación de bandas ecuatorianas como "los Choneros" en las fronteras andina y pacífica indica una disputa territorial por el microtráfico y el narcotráfico, intensificando la violencia e inseguridad. Esta dinámica fortalece las estructuras delictivas y genera alta vulnerabilidad para las comunidades locales, quienes pueden ser reclutadas, desplazadas o explotadas, incluyendo para la trata de personas, debido a la precariedad y falta de oportunidades.

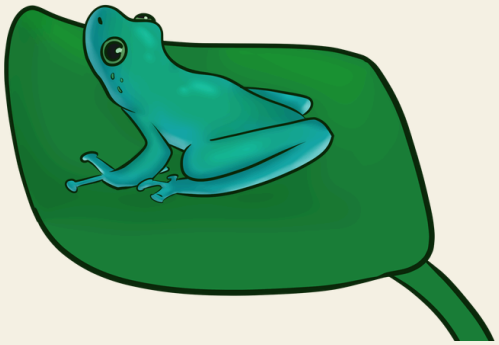
Acá igualmente es un tema bien delicado porque Tumaco es una de las zonas más cocaleras que ahorita tiene nuestro país...el dominio de la zona pacífica y en especial de Tumaco es del cartel de Sinaloa mexicano y los Chires de Colombia, ya el dominio, entonces el cártel de Sinaloa, pues maneja muy fuerte el tema de los corredores del narcotráfico, pues para Estados Unidos y Panamá… acá también hay otra banda delincuencial esa si se pelea tanto la frontera andina como la puntera pacífica y se llaman los choneros y los choneros es una banda delincuencial del Ecuador, hay una zona famosa que se llama chone en Ecuador y eso en la costera pacífica y pues ellos también

delinquen en la zona de frontera en primer lugar a través del microtráfico y el narcotráfico… Barbacoas y MRagüí Payán son municipios que están conectados a través del río Telembí una de las zonas más confinadas del país... son corredores estratégicos del narcotráfico para sacarlo a través del Océano Pacífico por Tumaco, una zona muy afectada por reclutamiento forzado por masacres por todos los hechos victimizantes contemplados en la ley 1448 los encuentras en esos municipios.[11]

Esta situación ha provocado un aumento en homicidios, amenazas, despojos y desplazamientos forzados, afectando desproporcionadamente a mujeres rurales y comunidades afro, indígenas y campesinas, quienes asumen roles de proveedoras y cuidadoras con poco apoyo. La **escasa presencia de la fuerza pública** permite la impunidad de los grupos armados, facilitando la trata de personas y el tráfico de migrantes, además de conectarse con el narcotráfico y el contrabando de armas, complicando la lucha contra la trata.



11 Fragmento tomado de la "Entrevista 06".



Las organizaciones sociales hacen algo, el Estado no hace nada. Llevamos haciendo algo para hacer política de los niños-niñas, se llevan 9 años y no ha salido la política y no tiene recursos para hacer ruta de atención a la violación o reclutamiento de niñas y niños.

Con el proceso de privatización, se abre la brecha racial y de clase. Por ejemplo, las dos únicas universidades públicas solo tienen ofertas carreras técnicas y tecnológicas, no profesionales.

Corporación Memoria y Paz -CORMEPAZ, Buenaventura, 7 julio 2023

Jamundí ha sido resguardado como territorio de guerrilla, corredor de droga (en la parte alta), en la parte plana, siempre hemos sido señalados por los grupos armados al margen de la ley. El corregimiento es un corredor de coca […] Es que están sembrando coca, los grupos señalan quienes pueden sembrar y quienes no, ellos ponen los precios. A los jóvenes los están incitando para que se vinculen a estos grupos. Hay jóvenes desaparecidos, estamos en la lucha para que los jóvenes no caigan, porque les ofrecen un sueldo para que ellos vuelvan al pueblo a hacer su propia justicia, la lucha es no hacerlo para no darle el poder a esos grupos. La gente espera mucho de los líderes, "la gente, los dejan solos como líderes.

En la Toma (Valle), pasa lo mismo, hay un consejo comunitario y una guardia Cimarrona, uno no sabe cuál es la autoridad. El problema es el miedo, hace poco asesinaron una persona en una plaza de mercado, lo hicieron arrodillar y le dieron 5 tiros, las personas no dicen nada, no hacen nada… allá no hay policía ni ejército, solo la guardia, pero no está armada. Se está aumentando el miedo, ellos (refiriéndose a las disidencias o grupos armados de la ley) empiezan a poner reglas.

En Jumbo se ve mucho problema por el microtráfico. Uno ya trata de cuidar los niños, uno vive con la zozobra, no solo lo que pasa del territorio donde se nace, sino donde se vive (Jumbo) también la complejidad (especialmente por el microtráfico y consumo de drogas). Fue muy triste lo que paso allí en la Toma, (el asesinado de la persona en la plaza de mercado), uno siente el dolor de esa familia, hoy fueron a ellos, eso puede pasarnos a nosotras.

Pastoral Afrodescendiente, Cali, 8 julio 2023

Las políticas nacionales contra la trata de personas y la asistencia a las víctimas se encuentran con obstáculos en términos de recursos y capacidades en esta región, donde la débil infraestructura estatal y el bajo acceso a servicios dificultan la protección de poblaciones en riesgo. Este vacío institucional subraya la necesidad de un análisis sobre la eficacia y alcance de las políticas de prevención y protección en contextos de alta vulnerabilidad, como los que caracterizan a esta región.

Las comunidades afrodescendientes e indígenas han sufrido en particular el desplazamiento forzado. La violencia y el crecimiento de cultivos ilícitos han exacerbado su marginalidad y exclusión, afectando sus derechos individuales y colectivos y debilitando su identidad cultural y autonomía territorial. El conflicto ha deteriorado sus formas de gobierno propio, ha introducido economías ilícitas, ha roto el tejido social y fragmentado la organización comunitaria.

El aumento de cultivos de coca en el Pacífico, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño, ha intensificado la confrontación por el control territorial. La producción y comercialización de clorhidrato de cocaína ha consolidado a la región como un enclave clave en el negocio de la cocaína.



El control de las rutas fluviales y marítimas, cruciales para el narcotráfico y la trata de personas, permite a los grupos criminales facilitar el tránsito de personas vulnerables, explotadas por redes de trata.

La alta pobreza y la deficiencia en servicios básicos en estos municipios aumentan la vulnerabilidad de sus habitantes, haciéndolas más susceptibles a ser reclutadas o explotadas por grupos armados ilegales. Los niños, niñas, adolescentes y mujeres, particularmente en situación de desplazamiento o pobreza, son más propensos a caer en redes de trata que prometen mejorar sus condiciones de vida.

Todo ello se ha reflejado en el aumento de la explotación sexual y los trabajos y servicios forzados, especialmente de mujeres y jóvenes, obligados a prestar servicios laborales o sexuales que contribuyen a la perpetuación de ciclos de violencia y explotación. La explotación sexual y los trabajos forzados (como finalidades de la trata de personas) son las formas más comunes de explotación que las comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan, exacerbadas por la pobreza y la presencia de grupos armados ilegales.

La explotación sexual comercial es un grave problema que se está presentando en la región y que afecta a las niñas y adolescentes especialmente, remuneradas por los grupos armados a cambio de servicios sexuales.

Los fines de semana las jóvenes son recogidas en lanchas y vehículos tripulados por miembros de las AGC que las llevan a otros corregimientos y playas de los municipios de Bahía Solano, Juradó y Nuquí para que sean explotadas sexualmente. (Defensoría del Pueblo, 009-24)

En el 2011, se reportaron raptos de niños indígenas por explotación sexual comercial. (El Imparcial, 2011).

Algunos menores de comunidades indígenas colombianas, sobre todo niñas, son "raptados" en varias regiones del país con fines de explotación sexual, denunció la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC). Existe una «cacería» de niños, explicó a RCN Radio el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade, quien detalló que esa práctica se está registrando especialmente en el departamento del Guaviare.

Según Andrade, los que «desaparecen» durante dos o tres días, e incluso a veces no regresan, son en su mayoría niñas indígenas de entre 12 y 14 años, que presuntamente son obligadas por sus captores a prostituirse y a vender droga. También se refirió a esa «caza» Jesús Flores, investigador de la ONIC, para quien el 90 por ciento de los pueblos indígenas de Colombia está en riesgo de desaparecer por el hambre y la violencia del conflicto armado interno. «Es una caza para utilización de niñas (…) Se las llevan, las traen y muchas veces no aparecen más, son de doce, trece y catorce años», comentó Flores a Caracol Radio. Niñas de 11 o 12 años ya están embarazadas, y siguen la vida igual, además porque se van con los chicos armados y uno no puede llamarle la atención al niño porque trae amenazas.

Del barrio están saliendo al menos 30 niñas menores de edad, están en López de Micay, las llevan a prostitución […] aquí llega una muchacha, las engatusa y las llevan en lancha y las dejan en los chongos, las dividen, las dejan venir unos días a Buenaventura y vuelven a López de Micay o en Satinga […] en López es más, porque hay minería. En fiestas o fines de semana, las exponen para la gente de Cauca que va para las fiestas. A las niñas las ponen a lavar ropa de guerrillero, y luego las inducen a la prostitución. […] Cuando las niñas están con los guerrilleros, no las dejan comunicarse, cuando están en la cabecera municipal si las dejan comunicarse. Todo esto es normal, porque no hay plata. Todas las niñas son del Lleras.

Las niñas empiezan a tener relaciones sexuales muy pequeñas, entonces la familia le dice, que para tener relaciones sexuales gratis, mejor que le den plata.

A las niñas se les inculca a ser objeto, que sus partes íntimas son objetos. La normalización de la sexualización […] las pruebas de amor […] van consumiendo […] van portando armas […] Luego las envían a la prostitución. Esa fue una política muy mala de Profamilia, se desbordó porque ahora todas las niñas están con pila (método anticonceptivo). La institucionalidad no pudo con el manejo de las enfermedades venéreas.

Hay como un tour de prostitución para mujeres que quieren ir al extranjero desde España cogen un tren que va por Europa, cuando la niña es más ofertada, la dejan allá, si no entonces la empiezan a violentar a encerrarla.

De aquí se van a Costa Rica, Ecuador, a la frontera con Ipiales […] a la prostitución, mucha gente de Buenaventura está en Tulcán, en México también mucha prostitución. Muchas niñas en el tema del WebCam, se van en Cali, o aquí mismo.

En Buenaventura, utilizan a los gay para llegar a las mujeres. Conocí a alguien que se lleva las niñas de Paz (barrio de Buenaventura), ellas confían en el amiguito y se llevan las niñas, ellos mismo se ofrecen para esas fiestas.

Corporación Memoria y Paz -CORMEPAZ, Buenaventura, 7 julio 2023

El caso de William Ramón Veloza Souza (La Vanguardia, 2019), el hombre que engañaba a niñas indígenas con promesas de una vida mejor, para luego someterlas a explotación sexual, es emblemático. Conocido como el “Caimán”, William Veloza jugaba un papel central, dedicándose a captar a menores, especialmente de comunidades indígenas, con engaños y regalos, para luego explotarlas sexualmente en Perú. Para trasladarlas, la red utilizaba documentos de identidad falsos. La investigación policial, originada por la denuncia de una madre de una víctima, reveló que la madre del "Caimán" ("la madame") también participaba, transportando a las menores de edad.

En tanto, el conflicto armado aumenta considerablemente los riesgos de trata de personas: sus efectos, tales como el desplazamiento, el débil estado de derecho, las adversidades socioeconómicas, la fragmentación social y la ruptura familiar incrementan la vulnerabilización de las personas frente a la trata de personas, causando su deshumanización y cosificación como botines de guerra o mercancías sexuales. Las mujeres y las niñas son las más afectadas por este delito, en la finalidad de prostitución forzada o explotación sexual, frecuentemente combinada con otros fines de explotación, como el matrimonio servil, los trabajos y servicios forzados y la servidumbre doméstica.

En Colombia, los grupos armados utilizan la trata como una estrategia para incrementar su fuerza laboral, obligando a las personas a actuar como combatientes, informantes, esclavas sexuales y trabajadoras en el campo y en la casa. La trata es también una fuente de financiamiento ya que explota a las personas en las actividades de minería, en las industrias de extracción o para la comisión de actos delictivos. En muchos territorios, coexisten grupos armados como la guerrilla y los paramilitares, que ejercen control de manera sistemática. No solo imponen su presencia mediante el uso de la fuerza, sino que también reclutan de forma forzada a niños, niñas y adolescentes, lo cual constituye una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, recurren a distintas formas de explotación sexual, trabajos forzados, entre otras. Demostrando que manejan múltiples modalidades de trata para sostener sus intereses económicos, afectando profundamente a las comunidades locales.

¿Hay convivir, guerrilla y paras? Sí, claro, todos ellos hacen presencia. Y pues reclutan, hay reclutamiento forzado, para niños, niñas y adolescentes en sus filas. Hay explotación sexual, hay explotación laboral, mejor dicho, yo me atrevo a decir que de todas las modalidades de trata que hay, estos grupos las manejan todas.[12]

Miembros de estos grupos atraen o secuestran a mujeres para que trabajen en sus campamentos, explotándolas sexualmente y, en ocasiones, transportándolas a otros países.

12 Fragmento tomado de la "entrevista 06"

¿Cuántas son las víctimas? No es posible determinar cuántas personas han sido las víctimas de trata en el marco del conflicto armado, pero hay datos que nos ilustran la gravedad de la situación. En 2021, integrantes de la JEP anunciaron que entre 1996 y 2016, 18.677 niños fueron reclutados y utilizados por las FARC-EP para el conflicto armado. Entre el 2017 y 2019, la Defensoría del Pueblo emitió 108 Alertas Tempranas en las cuales advirtió sobre el riesgo de reclutamiento en 182 municipios del país. (Defensoría del Pueblo, 2020)

En 2022, la organización internacional OCHA informó que el 77 % de los municipios del departamento de Chocó y el 33 % de los municipios del departamento de Nariño corrían un alto riesgo de reclutamiento de niños, en particular niños indígenas y afrocolombianos. (Caracol Radio, 2023).



4.2. Dinámicas de la trata de mujeres en el Pacífico

La trata de mujeres es un fenómeno profundamente arraigado en la historia, estrechamente vinculado desde sus inicios a la guerra, la esclavitud y la objetivación sexual.

En la época colonial, las mujeres, especialmente las de origen africano e indígena, eran objeto de tráfico con tres objetivos principales: (1) convertirlas en mano de obra gratuita, (2) utilizarlas como reproductoras para generar más mano de obra gratuita y (3) explotarlas sexualmente. Este último propósito, aunque a menudo subordinado a los dos primeros, siempre estuvo presente y las mujeres eran concubinas o esclavas a disposición de sus patrones.

En la actualidad, la trata de personas sigue manifestándose bajo las mismas modalidades: mercado matrimonial, entretenimiento sexual de oficiales y soldados, explotación de mano de obra barata, venta de servicios a través de Internet y, por supuesto, comercio sexual y actividades turísticas asociadas. (Chiarotti, 2003).

Un reportaje de la Silla Vacía,[13] realizado en zonas de conflicto armado de Colombia, evidencia que la explotación de mujeres y niñas es común, con actores armados y proxenetas colaborando para movilizarlas a campamentos o negocios de explotación sexual. Cuando no son los grupos guerrilleros a manejarlos, son los grupos criminales.



[…] En Colombia, la explotación sexual tiene diversos contextos. Por ejemplo, en zonas de conflicto armado, donde hay economías extractivas lícitas e ilícitas y en regiones fronterizas con dinámicas migratorias.

De acuerdo con los estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica, la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y la imposición de la prostitución incluso en mujeres adultas fue especialmente prevalente en zonas de conflicto, donde actores armados y proxenetas colaboraban para movilizar a mujeres y adolescentes a campamentos o negocios de prostitución, usándolas para satisfacer demandas sexuales y ejercer control social.

La Comisión de la Verdad también presentó hallazgos sobre cómo los paramilitares lideraban las redes de trata interna en las zonas donde tenían control: se encargaban de la captación, el transporte, el traslado y la acogida de las víctimas.

Si bien dichos estudios identifican estas dinámicas en los momentos álgidos del conflicto armado, advierten que uno de los desafíos y continuidades de las

13 La Silla Vacía es un medio de comunicación digital fundado en 2009 para ofrecer un periodismo independiente,transparente, digital y sin barreras.

violencias de género es la explotación sexual, ahora en manos de grupos criminales o utilizada como estrategia de reclutamiento forzado en sus zonas de incidencia. (La Silla Vacía, 2024) […]

La baja autoestima y necesidad de poder de los jóvenes. Los grupos armados o personas que les prometen mejores ingresos o tener lanchas, motos, IPhone y por ahí los captan.

Ser parte de la familia, ha sido una estrategia de mucho éxito para los reclutadores, porque sus víctimas no los van a denunciar, ni poner en riesgo de que sean judicializados.

Corporación Memoria y Paz -CORMEPAZ, Buenaventura, 7 julio 2023

El proceso comienza con la captación de víctimas mediante ofertas laborales falsas, que se difunden a través de redes sociales o de manera presencial en zonas vulnerables. Dado que las organizaciones no operan solo nacionalmente y tienen conexiones internacionales, el traslado de las víctimas a otros países es bastante ágil y fácil, hacia donde la explotación es más lucrativa y menos detectable.

Un ejemplo de esto es el caso de una mujer del Valle del Cauca, quien denunció haber sido víctima de trata de personas en China:



[...] Le ofrecieron un trabajo como vendedora de joyas con un jugoso sueldo, y ella, con la ilusión de ayudar a su familia, aceptó. En Colombia, le pidieron su pasaporte, lo enviaron a Bogotá y terminó con una visa china. Afirma que, estando en la capital, sospechó de lo que podía ocurrir, pero aun así abordó el avión con destino al continente asiático. (Ahora Mundo, 2023).

En otro caso:



[...] las mujeres eran captadas con anuncios de ofertas laborales fraudulentas para trabajar en una fábrica de textiles en Ibarra, pero al final cayeron en Night Clubs explotadas en la prostitución ajena.[14]

Refuerza como el patrón de captación mediante el uso de ofertas laborales fraudulentas es una de las estrategias más comunes utilizadas por las redes de trata de personas. En este caso, las mujeres fueron engañadas con promesas de empleo en una fábrica de textiles en Ibarra (Ecuador), lo que sugiere una fachada de formalidad y legalidad que facilita el desplazamiento voluntario de las víctimas. Sin embargo, una vez trasladadas, fueron llevadas a night clubs donde fueron explotadas sexualmente.

Las víctimas son atraídas por ofertas aparentemente legítimas que prometen empleo en el extranjero con sueldos elevados. Generalmente a las mujeres jóvenes les ofrecen trabajos en Filipinas, China, Italia, Singapur, entre otros, para trabajar en restaurantes, tiendas de ropa u hoteles de lujo. Ejemplo de ello es el caso sucedido en 2017 en el Valle del Cauca en donde:



[…] A través de engaños, contactaba mujeres en Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca con la promesa de trabajos como empleadas domésticas, de restaurantes, hoteles, cuidadoras de niños y otros, prometiéndoles jugosas ganancias mensuales en China. (El País, 2017)

14 Fragmento tomado de la "Entrevista 6"

Una vez que las víctimas aceptan la oferta, los tratantes coordinan el traslado, proporcionando dinero para vestuario, tiquetes de avión y otros gastos relacionados con el viaje, presentando todo como una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Al llegar a su destino, las víctimas descubren que las promesas eran completamente falsas. En lugar de trabajar en los empleos ofrecidos, son forzadas a realizar trabajos en condiciones extremas, a menudo sin recibir ningún tipo de remuneración:



Un ejemplo de esto es el caso de las víctimas captadas por la tratante Martha Lucrecia Hoyos, quienes eran engañadas a través de una oferta de empleo, pero terminaban siendo obligadas a realizar trabajos de "dama de compañía" para grupos criminales, como los Yakuza en Asia. Estas mujeres eran sometidas a abusos físicos y psicológicos constantes, sin recibir pago alguno. (El Tiempo, 2018)

La falsificación o manipulación de documentos, como pasaportes y visas, facilitan el tránsito de las víctimas por los controles migratorios, sin levantar sospechas:



De acuerdo con la Fiscalía, esta persona entregaba a las víctimas diferentes sumas de dinero para que presentaran en los puntos de control migratorio, las trasladaba hacía el aeropuerto y les impartía claras instrucciones para que las repitiera ante las autoridades migratorias y pudieran ingresar a los diferentes países de destino sin inconveniente alguno. (El Tiempo, 2018)

Y la deuda para saldar es también otro elemento importante que los tratantes utilizan para mantener el control absoluto sobre sus víctimas, obligándoles a trabajar en condiciones adversas: la deuda nunca desaparece, lo que impide su liberación:

En ese momento, las mujeres eran notificadas de una supuesta deuda que habían adquirido por los gastos del viaje y la alimentación. La suma que exigían era mayor a la que habían entregado a las víctimas. (…) Para poder saldar la supuesta deuda, las mujeres y adolescentes eran explotadas sexualmente durante largas jornadas, sin descansos, bajo tratos crueles e inhumanos, sin poder usar celulares ni comunicarse de ninguna manera con sus familiares. Además de eso, tenían que pagar multas por incumplir los horarios que les exigían y por salir del bar en donde eran violentadas. (Infobae, 2023)

Esto es aún más evidente al confrontar la información consignada en la Alerta Temprana 009- 2024 de la Defensoría del Pueblo donde se destaca la alarmante situación de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de comunidades étnicas, quienes son las más vulnerables a la explotación sexual y la trata de personas con fines sexuales. En algunos casos, sus padres, amenazados, han sido obligados a entregarlas, generando un entorno de coacción que desalienta a otras familias a resistir.

A lo anteriormente señalado se suman las actividades de explotación del trabajo doméstico no remunerado, es decir **trata de personas con fines de trabajo forzado:** las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres son internadas en las casas, fincas o establecimientos de los grupos armados no estatales sin recibir remuneración y en muchos casos atendiendo también los deseos sexuales de sus victimarios.



4.3. ¿Víctimas de la trata de personas o del conflicto armado?

En Colombia, actualmente, las personas quienes han sido víctimas de trata de personas en el marco del conflicto armado son reconocidas víctimas de este delito y no de trata de personas. Informes de las Naciones Unidas (Global Report on Trafficking, entre ellos) subrayan que si bien el reclutamiento forzado y la actividad delictiva forzada por grupos armados ilegales pueden ser clasificadas como finalidades del delito de trata, en Colombia la legislación lo aborda como un crimen distinto. Desde el 2017, no se ha logrado condenar a ninguna persona de estos grupos por tales atrocidades. (El Colombiano, 2020)

Intentemos analizar esta relación compleja:



- Décadas de conflicto armado interno, con la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares y otros actores armados, han generado un ambiente de violencia estructural en Colombia, contribuyendo a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluso el desplazamiento forzado y la explotación de las personas. Las víctimas de trata pueden haber sido afectadas por estas dinámicas de violencia y su situación a menudo se enmarca en el contexto del conflicto armado.

- Las víctimas de trata de personas en Colombia a menudo provienen de comunidades desplazadas forzadamente por el conflicto armado. Las situaciones de pobreza, la falta de protección y el acceso limitado a servicios básicos en los territorios de destino pueden convertirse en factores de vulnerabilidad, haciéndolas más expuestas a las redes de trata.

- La Ley 1448 de 2011, diseñada para abordar las necesidades de las víctimas del conflicto armado (afectadas por desplazamiento forzado, violencia sexual y otras formas de victimización) puede incluir a las víctimas de la trata, facilitándoles el acceso a recursos y mecanismos de reparación en lugar de tratarlas como una categoría independiente.

Tras analizar la profunda interconexión entre el narcotráfico, el conflicto armado y la trata de personas, y cómo estas dinámicas recrudecen la vulnerabilidad de las comunidades, el siguiente apartado se enfocará en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que señalan situaciones de riesgo específicas en la región.

5.LAS ALERTAS TEMPRANAS LANZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO



Una herramienta fundamental en la lucha contra la trata de personas son las alertas tempranas, señales o avisos que se emiten con anticipación para prevenir o mitigar los efectos de un evento adverso o crisis. En el caso de la trata de personas pueden anticipar y prevenir este delito, proteger a las víctimas y/o desarticular las redes criminales. Su eficacia depende de la colaboración de diversos actores y de la implementación de estrategias integrales.

Los objetivos de las alertas tempranas:

- Prevenir y reducir el impacto del evento adverso.
- Preparar a las comunidades, gobiernos y organizaciones a tomar medidas preventivas.
- Coordinar la respuesta de emergencia de manera más efectiva.

Las Alertas Tempranas son pautas orientadoras del accionar estatal, sin carácter de obligatoriedad para las entidades que las reciben: su eficacia depende de la voluntad de las personas de actuar en consecuencia.

Su relación con la trata de personas y el Pacifico:

Reclutamiento ilícito: especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales, donde se recluta a menores y jóvenes para ser explotados sexualmente o laboralmente.

Explotación sexual comercial: en zonas turísticas, centros urbanos y áreas fronterizas, se identifican redes de explotación sexual que afectan principalmente a mujeres y niñas.

Trabajo forzoso: en sectores como la agricultura, la minería y la construcción, se documentan casos de trabajadores sometidos a condiciones de esclavitud moderna.

Tráfico de migrantes: la trata de migrantes, especialmente de mujeres y niñas, se vincula con la explotación sexual y laboral.

Alertas [Tempranas] de la DP sobre trata de personas en el Pacífico:

Municipios "alertados": Acandí, Bahía Solano, Buenaventura, Jurado, Necoclí, Nuqui, Turbo, Ungía.

Poblaciones identificadas en situación de riesgo:

- Migrantes y refugiados
- Niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ)
- Mujeres.
- Población étnica afrodescendientes e indígena
- Población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD)

Otras afectaciones en la región que pueden relacionarse con trata de personas: conflicto armado, migración, desplazamiento, extractivismo, inundaciones, agricultura de subsistencia, falta de acceso a mercados y tecnologías, sobreexplotación de los recursos pesqueros, economía informal.



En el detalle:

1. Colombia (**Antioquia y Chocó**) y Panamá comparten corredores territoriales a la altura del Darién y del Pacífico que, durante años, han sido utilizados para el despliegue de flujos migratorios que se extienden hacia Centro y Norteamérica. En el transcurrir de dichos flujos, la población migrante y aquella que reside en ambos países se ha visto expuesta a diversas formas de riesgo de vulneración a sus derechos, situación que demanda una actuación institucional coordinada binacionalmente, capaz de mitigar no solo las dinámicas violentas que les afectan, sino también de hacerles frente a todas las formas de vulnerabilidad que amplifican el impacto humanitario para estas poblaciones.



001/2023 Binacional (Colombia y Panamá)

014/2023 para Colombia Emitida conjuntamente por las Defensorías del Pueblo de ambos países, advierte cómo el conflicto armado y el crimen organizado (o en proceso de organización) inciden en los procesos migratorios que tienen lugar en la frontera de ambos países y de qué forma esto se ha traducido en graves riesgos de violaciones a los derechos humanos de la población civil migrante y local.

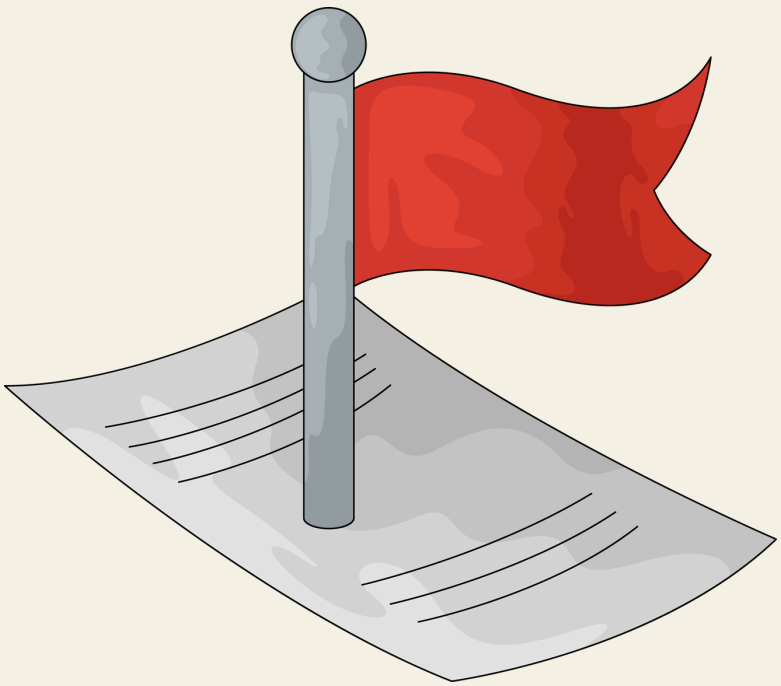
Alerta 014/2023. La frontera colombo-panameña es escenario de una grave crisis humanitaria, marcada por la violencia, la explotación y la vulnerabilidad de los migrantes y las poblaciones locales. La presencia de grupos armados ilegales (Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y el clima de violencia y temor en la región y específicamente en los municipios de Acandí, Jurado y Ungía [Chocó], Necoclí y Turbo [Antioquia] de la parte colombiana, las redes de trata de personas y la falta de una respuesta coordinada agravan la situación. Las comunidades locales, especialmente los pueblos indígenas y afrodescendientes, son particularmente vulnerables debido a su aislamiento geográfico, su dependencia de los recursos naturales y su falta de acceso a servicios básicos.

De las 16 recomendaciones formuladas para Colombia, solo dos (2) se refieren a **trata de personas**: (1) adoptar medidas para prevenir atentados contra la vida, la seguridad, la integridad y la libertad personal de líderes políticos, sociales y comunitarios, sus colectivos y organizaciones, de las personas defensoras de derechos humanos y de la población migrante en tránsito por el territorio de los municipios objeto de esta Alerta Temprana, y (2) informar de los avances en las investigaciones de rigor que se adelanten con ocasión de los homicidios, amenazas, extorsiones, tráfico de migrantes, trata de personas y desplazamientos de los que vienen siendo víctimas los y las habitantes de los de los territorios objeto de esta Alerta y la población migrante de diversas nacionalidades que por ellos transitan o habitan.

2. Desde el año 2001 hasta 2021, la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de 13 documentos de advertencia para el **Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca)**, junto con una variedad de Notas de Seguimiento con las cuales se actualizó el riesgo que previamente se advertía o anunciaba en esta Alerta Temprana. (Ver Alerta 039-2023)

3. En el **Chocó**, la escasa o nula presencia institucional, la carencia de servicios públicos básicos, como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, una deficiente atención en salud, la baja inversión en educación, la limitada oferta de vivienda y una precaria inversión social son riesgos muy altos para las comunidades locales. Todo ello, unido a la falta de cobertura móvil e internet y las deficiencias en los servicios eléctricos, limita la capacidad de las comunidades rurales para informar a tiempo sobre amenazas y riesgos, exacerbando su situación de vulnerabilidad. (Ver Alerta 009/2024) Otros departamentos con presencia de grupos armados ilegales, que registran el tipo de situaciones manifestadas en la alerta 009/2024 son Arauca, **Cauca, Valle del Cauca y Nariño**. (Infobae, 2024).

4. La vinculación de niños, niñas, adolescentes (NNA) indígenas, afrodescendientes y campesinos/as, bajo las modalidades de reclutamiento forzado, uso y utilización, en el marco del control hegemónico que ejerce la facción disidente de las antiguas FARCEP denominada “Estado Mayor Central” es un riesgo altísimo en el **Cauca**.



015/2024

Se advierte un grave riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización a los niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes residentes en los municipios de Íquira (Huila) y **Páez (Cauca)**, algunos de ellos con pertenencia étnica indígena, afrocolombiana o campesina. El riesgo se extiende a sus núcleos familiares, quienes enfrentan amenazas para efectuar las denuncias respectivas, ostentando un amplio riesgo de desplazamiento como mecanismo de autoprotección. En el caso de comunidades étnicas, indígenas y afrocolombianas los hechos de vinculación de NNA a grupos armados ilegales constituye un perjuicio irremediable y riesgo desproporcionado a la pervivencia física y cultural de los pueblos y comunidades, al tiempo de afectar de manera diferencial a las autoridades étnicas, ya sean tradicionales y/o representativas, dadas sus funciones en relación con el cuidado de ese grupo poblacional. Adicionalmente, se consideran las afectaciones a las personas defensoras de derechos humanos y liderazgo social en el ámbito y sector de activismo ligado con los derechos de los NNA y sus familias, pueblos étnicos y campesinado. Persisten también riesgos para los docentes y directivos docentes por el debilitamiento de las escuelas como entornos protectores.

Alerta 015/2024. Tiene en cuenta el pronunciado y continuo contexto de vulnerabilidad socioeconómica y territorial en la franja bi- departamental Cauca – Huila que, junto a la afectación diferencial y desproporcionado que sufren los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas residentes en la zona (enfoque interseccional), se traduce en riesgos para la supervivencia física y cultural para los mismos. El riesgo de vulneraciones a los derechos de la población civil no se explica únicamente por el accionar de los grupos armados ilegales. Dicha probabilidad de violaciones y/o infracciones al DIH se exacerba y posibilita en contextos territoriales con marcada ausencia o presencia diferenciada del Estado, particularmente de su oferta social/civil orientada a asegurar el goce efectivo de derechos de la población, en especial niños, niñas y adolescentes y donde los mecanismos de afrontamiento, autoprotección y resistencia social se han visto profundamente socavados y requieren ser fortalecidos.

Con la revisión de las Alertas Tempranas que visibilizan los focos de riesgo y la vulnerabilidad de ciertas poblaciones ante la trata, el capítulo siguiente abordará las acciones y respuestas institucionales y de cooperación internacional implementadas para combatir este delito en el Pacífico colombiano.



6.ACCIONES CONTRA LA TRATA

6.1. Respuesta institucional:

A pesar de los desafíos en términos de efectividad, continuidad y recursos, la lucha contra la trata de personas en Colombia está siendo abordada por diversas autoridades locales y nacionales.

6.1.1. Cauca

En septiembre de 2024, el Ministerio del Interior, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lideró un proceso de articulación y prevención en los territorios Misak del Cauca y Huila, dando paso a la firma de un **acuerdo de voluntades de los Pueblos Indígenas para proteger la vida, los derechos y la dignidad de sus comunidades, así como para prevenir la trata de personas** en los resguardos indígenas.

Se implementaron estrategias enfocadas en la identificación y reporte de este delito dentro de los pueblos indígenas. (Ministerio del Interior, 2024).

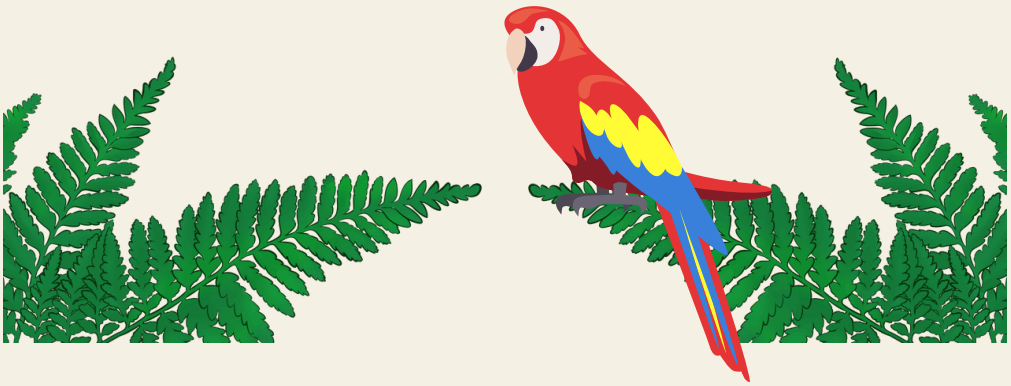
6.1.2. Chocó

Con motivo del Día Mundial contra la trata de Personas, la Gobernación del Chocó y la Fundación Renacer, en colaboración con la Alianza de Cooperación Internacional para la Protección de la Niñez y Adolescencia (CPC) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, han lanzado oficialmente la Estrategia Departamental “El Chocó Protege”. Esta iniciativa busca prevenir y combatir la trata y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la región.

La estrategia, presentada en un evento especial en Quibdó, simboliza el compromiso de la comunidad con la protección infantil. "El Chocó Protege" se centra en cuatro líneas de acción clave: (1) movilización social, (2) capacitación para atención centrada en las víctimas, (3) fortalecimiento de redes comunitarias y (4) fomento de la participación juvenil. Estas acciones están

diseñadas para reforzar las capacidades de las instituciones y la comunidad en la lucha contra estos delitos.

A pesar de los esfuerzos realizados, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. La Procuraduría ha denunciado el alto riesgo de violaciones de derechos humanos y la desprotección de las víctimas, lo que subraya la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y asistencia. Además, la falta de recursos y la corrupción obstaculizan los esfuerzos para desmantelar las redes de trata.



6.1.3. Valle del Cauca

El Plan de Acción Territorial[15] involucra a 38 municipios del departamento que, en colaboración entre ellos y las entidades nacionales e internacionales, como el Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), buscan sensibilizar a la comunidad y fortalecer la protección de las víctimas. (El Tiempo, 2024)

15 Ante la situación, en el departamento, se inició la construcción del Plan de Acción Territorial para tener las líneas de trabajo que van de la mano y en articulación con el ministerio del Interior y la Organización Internacional de Migrantes. "Este plan de acción tiene incidencia en 38 municipios y en los dos distritos especiales del departamento del Valle (Cali y Buenaventura. Tiene una cobertura para acompañar a las alcaldías municipales y a todas las víctimas por trata de personas", explicó la secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Ana María Sanclemente. . En el comité participan de 19 integrantes del sector gubernamental y del privado.

A pesar de los avances en la lucha contra la trata, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Las autoridades del Valle del Cauca han implementado el Pacto por la lucha contra la trata de Personas (OIM, 2023), que involucra 40 municipios del departamento, pero la efectividad de estas iniciativas depende en gran medida de la continuidad y del apoyo financiero. La Procuraduría ha señalado que las víctimas están gravemente desprotegidas, lo que indica que es necesario mejorar los mecanismos de atención y asistencia, y que los esfuerzos preventivos deben ser más contundentes. (El Tiempo, 2023)

El Valle del Cauca ha mostrado compromiso en la creación de redes de apoyo para las víctimas, pero es esencial que estas iniciativas se acompañen de recursos suficientes y de un enfoque integral que no solo se limite al rescate, sino que también incluya programas de prevención y sensibilización en la comunidad.

Hablando de la juventud… yo vivo cerca de dos lugares donde venden vicios, veo cualquier cantidad de personas (niños, viejos, profesionales); me llamó la atención un joven de 13 años que fuma en una esquina, para él no hay un proyecto de vida… ¿qué hay en Cali para que cambie ese joven? Hay un programa de jóvenes que se llama "promotores culturales" y es un programa gratuito todo el año (deporte, música, arte). Ese programa fue creado para sacar a jóvenes de la calle y la alcaldía de Cali da recursos para esos programas, para presentaciones, incentivos (medalla – aporte económico) … eso motiva a las personas, falta expandir la información. Hay un programa para formar a recreacionistas, todo gratis, y pueden llevar a los jóvenes conseguir trabajo como recreacionistas.

Pastoral Afrodescendiente, Cali, 8 julio 2023

6.1.4. Nariño

La estrategia implementada por la Gobernación de Nariño, a través de su participación en el Encuentro Binacional Colombia – Ecuador en Materia de trata de Personas, se centra en fortalecer la prevención, protección, asistencia, investigación y judicialización de casos de trata. Al involucrar a diversos actores como el sector salud, la fuerza pública y otras entidades nacionales e internacionales, la estrategia busca establecer alianzas y crear un enfoque integral para combatir este delito transnacional. Además, como departamento fronterizo, Nariño juega un papel clave al fomentar la cooperación binacional, reconociendo que la lucha contra la trata de personas requiere una acción conjunta y coordinada entre los dos países. (Informativo del Guaico, 2023)

6.2. Desafíos en la identificación y lucha contra la trata

Mejora de los protocolos: a pesar de los esfuerzos, no se implementan protocolos de protección y asistencia para las víctimas. Algunos departamentos, como Chocó, Cesar y Valle del Cauca, aún no tienen claro si se ha adoptado una ruta de protección eficiente, lo que genera incertidumbre sobre la cobertura y el acceso de las víctimas a los servicios necesarios.

La creación de comités interinstitucionales sería un paso positivo, con el compromiso firme a garantizar la implementación adecuada de las normas existentes.

Subregistro: en muchas zonas, especialmente en aquellas bajo el control de grupos armados o el crimen organizado, las víctimas y sus familias tienen miedo de denunciar por temor a represalias, limitando significativamente su capacidad para acceder a la justicia. Las comunidades afectadas por estos delitos a menudo viven en un contexto donde la violencia, el control territorial y el crimen organizado son omnipresentes, lo que dificulta el trabajo de las autoridades y de las organizaciones sociales que intentan desarticular estas redes.

Las víctimas no se identifican como víctimas por el temor a la denuncia y a la desconfianza de las autoridades locales porque he tenido testimonios de abuso desde las mismas autoridades locales hacia víctimas de trata de personas o presuntas víctimas de trata de personas.[16]

Falta de coordinación entre las diferentes instituciones (Policía, Fiscalía, Medicina Legal, ICBF, etc.): no se comparten y analizan datos de forma efectiva, limitando la formulación de políticas públicas eficientes:

"La primera acción para mejorar esa respuesta tiene que ver con caracterizar el fenómeno correctamente, lo que ya supone una barrera inicial. La Policía tiene una base de datos que agrupa todos los delitos sexuales bajo el título "delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales" (artículos 205 al 219 del Código Penal), e incluye delitos relacionados con la violación y la explotación sexual. Sin embargo, esta base de datos, por lo menos públicamente, no desglosa los delitos por tipo, sino que presenta el número agregado de víctimas por municipio.

Por su parte, la Personería ofrece datos de las víctimas que solicitaron atención, Medicina Legal procesa casos basados en alertas de centros médicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presenta los casos que pasan por restablecimiento de derechos y la Fiscalía gestiona los procesos de denuncia. Como resultado, tenemos ***diversas fuentes de información*** *que, aunque cruciales,* ***no se coordinan*** *con frecuencia para un análisis adecuado.*

16 Fragmento tomado de la "Entrevista 06".

Formular políticas públicas efectivas requiere de datos desagregados que marquen tendencias y particularidades de los contextos donde ocurre el delito. También, hay que facilitar al acceso a esos datos (salvaguardando el anonimato y el derecho a la privacidad e intimidad de las víctimas) para que la academia y la sociedad civil puedan contribuir a caracterizar el fenómeno y a construir políticas que prevengan este delito y sancionen efectivamente a las estructuras e individuos que administran las redes de prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, así como a los usuarios finales. (La Silla Vacía, junio de 2024).

Naturalización del delito: en algunas comunidades hay la tendencia a naturalizar este delito, como en el caso de los niños indígenas que son utilizados para pedir limosna en las calles. En estos casos, los niños no son realmente hijos de las personas que los explotan, sino que son "prestados" por sus padres legítimos para ejercer la mendicidad. Esta situación no solo ilustra la explotación infantil, sino también cómo algunas prácticas de trata se han integrado en las dinámicas sociales de ciertas comunidades, lo que complica aún más su erradicación.

Brecha significativa entre los esfuerzos institucionales de prevención y la rápida adaptación de las redes de tratantes: las organizaciones delictivas demuestran ser altamente dinámicas, flexibles y expertas en la adopción de nuevas tecnologías, lo que las coloca en una constante ventaja frente a las iniciativas estatales o comunitarias. Este desequilibrio limita la capacidad de anticipar y contrarrestar las estrategias de captación de los tratantes, que evolucionan hacia métodos cada vez más sofisticados, personalizados y difíciles de detectar. Como señala un experto local en trata de personas:





Mientras los COAT [Centro Operativo Anti-Trata] dan un paso para la prevención de la trata de persona, la delincuencia transnacional da 3 pasos, entonces siempre estamos cortos con las nuevas formas de captación que tienen los tratantes en especial a niñas y mujeres.[17]

6.3. La cooperación internacional

La región Pacífica colombiana depende significativamente de la financiación externa e interna para la implementación de proyectos sociales. Los recientes cambios en el contexto global han afectado significativamente a las organizaciones que implementan proyectos financiados por cooperación internacional en el territorio. En particular, la terminación de contratos directos de USAID podría traducirse en la reducción o cancelación de programas vitales para el desarrollo de las comunidades, afectando áreas cruciales como la prevención y atención de la trata de personas (disminución de recursos para campañas de concientización, apoyo a víctimas y fortalecimiento de redes de protección), el desarrollo económico (reducción de proyectos de generación de ingresos, capacitación laboral y apoyo a emprendimientos locales, aumentando la vulnerabilidad de la población a la explotación), la salud y la educación (menor inversión en programas de salud sexual y reproductiva, acceso a servicios de salud y proyectos educativos que buscan empoderar a las comunidades y ofrecer alternativas a la violencia y la criminalidad) y, finalmente, el fortalecimiento institucional (debilitamiento de las capacidades de las entidades locales para responder a las necesidades de la población y garantizar la protección de los derechos humanos).

El recorte presupuestario podría exacerbar las desigualdades existentes, aumentar la marginalización de las comunidades del Pacífico y crear un ambiente más propicio para la proliferación de problemáticas sociales como la trata de personas, el reclutamiento forzado y la violencia.

17 Fragmento tomado de la "Entrevista 06".

Iniciativas como el convenio firmado con el Reino de España, que busca fortalecer las estrategias contra la trata de personas en departamentos clave como Nariño, Chocó, Antioquia y Norte de Santander, se centra en la creación de planes locales y en el establecimiento de protocolos para la reintegración de las víctimas, lo que subraya la necesidad de un enfoque global e inclusivo para enfrentar este crimen transnacional. La cooperación internacional es clave para acceder a recursos, compartir mejores prácticas y garantizar que las víctimas reciban apoyo adecuado. (Opinión Caribe, 2023)

Es cierto que la efectividad de estas iniciativas depende de la implementación adecuada (con una infraestructura de apoyo sólida) y la asignación de recursos.

La falta de un diagnóstico preciso en algunos territorios y la disparidad en la implementación de las rutas de protección en varias regiones son ejemplos de barreras que deben superarse, ya que la desarticulación de redes criminales y la protección de víctimas requieren un enfoque integral.

Después de examinar las acciones emprendidas para combatir la trata de personas, así como los desafíos persistentes en la identificación de víctimas y la coordinación interinstitucional, cerramos con una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer la prevención, la protección y la lucha contra la trata de personas en la región Pacífica colombiana.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La situación de la trata de personas evidenciada en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño revela una realidad alarmante y compleja que involucra múltiples factores sociales, económicos y geográficos.

Superar los grandes desafíos que enfrenta la región requiere de la articulación de los múltiples actores que coexisten en el territorio, así como de procesos de gestión e integración de largo plazo. Pese a los múltiples esfuerzos de las diferentes administraciones departamentales y municipales, existe un consenso en torno a la idea que ningún cambio estructural puede lograrse de un año para el otro, ni siquiera durante un periodo de gobierno.

Al investigar en bases de datos físicas y virtuales, se observa que la información sobre la trata de personas en la región Pacífica colombiana es limitada. Los temas predominantes en la región suelen ser el conflicto armado, la violencia de género y la minería, los cuales acaparan la atención académica y de los medios. Sin embargo, al enfocar la búsqueda en explotación sexual como finalidad de la trata, se encuentran varios resultados relevantes. Esta discrepancia puede indicar una falta de investigación específica sobre la trata en la región, a pesar de que el fenómeno de explotación sexual puede estar vinculado a problemas más amplios como los conflictos y la violencia en el área. Es crucial ampliar el enfoque de investigación para abordar de manera integral la trata de personas en el Pacífico colombiano, considerando su relación con otros temas preponderantes.



En la región Pacífica colombiana, la trata suele ser más visible en el contexto de la explotación sexual, mientras que otras formas de explotación, como el trabajo forzado, reciben menos atención mediática y pública. Este fenómeno puede entenderse mejor a través de un análisis de noticias y reportajes que abordan estas problemáticas. La diferencia en la cobertura mediática puede estar relacionada con el hecho de que la explotación sexual, al estar más ligada a la criminalidad y al turismo, tiende a captar más atención. Los reportajes suelen centrarse en historias individuales de abuso sexual, que pueden ser más impactantes y visualmente llamativas en comparación con los problemas más invisibles del trabajo forzado.

Estos territorios son vulnerables debido a la pobreza, la presencia de grupos armados ilegales, el desplazamiento forzado y la falta de presencia estatal efectiva, lo que favorece la operación de redes criminales que explotan a mujeres, niños, niñas y adolescentes, tanto dentro del país como para destinos internacionales. A pesar de los esfuerzos institucionales y comunitarios, la respuesta sigue siendo insuficiente y enfrenta obstáculos significativos como el subregistro de casos, la desprotección de las víctimas y la falta de recursos adecuados.



- **Fortalecer la respuesta institucional:** es urgente mejorar los mecanismos de identificación, atención, protección a las víctimas y judicialización del delito. Esto incluye no solo el rescate, sino también la implementación de programas integrales de asistencia legal, psicosocial y económica. Las autoridades deben garantizar una mayor coordinación entre las diferentes entidades del gobierno y con organizaciones internacionales, enfatizando su intervención en áreas fronterizas.

- **Prevenir y sensibilizar:** deben desarrollarse campañas de prevención que lleguen a las comunidades vulnerables, especialmente en áreas rurales, abandonadas y discriminadas. Estas campañas deben abordar de manera clara y efectiva los riesgos de la trata de personas, las falsas promesas de empleo y otros tipos de engaño a los que pueden estar expuestos. Además, es fundamental sensibilizar a las comunidades para evitar la naturalización de prácticas como la explotación sexual, trabajos forzados, matrimonios forzados o mendicidad infantil ajena.

- **Capacitar:** es crucial implementar un plan integral de capacitación y sensibilización dirigido a todos los actores clave: funcionarios públicos (especialmente aquellos con funciones en seguridad, justicia y atención social), docentes, padres de familia, líderes comunitarios y la ciudadanía en general. El objetivo es que puedan identificar de manera clara las señales de alerta y los indicadores del delito de trata de personas, permitiendo crear una red de alerta temprana mucho más amplia y robusta.

- **Desarticular las redes criminales:** a pesar de los operativos de seguridad, se requiere un enfoque más robusto en la desarticulación de las redes de trata. Esto debe ir acompañado de un esfuerzo por atacar las economías ilícitas que alimentan estos delitos, como el narcotráfico, la explotación minera ilegal y la corrupción. Las autoridades deben garantizar que los responsables de estos delitos reciban sanciones adecuadas.

- **Revisar y optimizar el marco legal:** es fundamental revisar y reforzar el marco legal en relación con la trata de personas, asegurando que las leyes sean adecuadas para abordar la complejidad del fenómeno. Además, deben promoverse mayores sanciones para los grupos armados ilegales y redes criminales involucradas en la trata.

- **Investigar y hacer seguimiento continuo:** dado el subregistro y la falta de información detallada sobre la trata de personas, es esencial que se realicen investigaciones más profundas y exhaustivas sobre el comportamiento del delito en estas regiones. Esto también implica generar datos desagregados por género, edad y tipo de explotación, entre otros, para poder diseñar estrategias de intervención más efectivas.

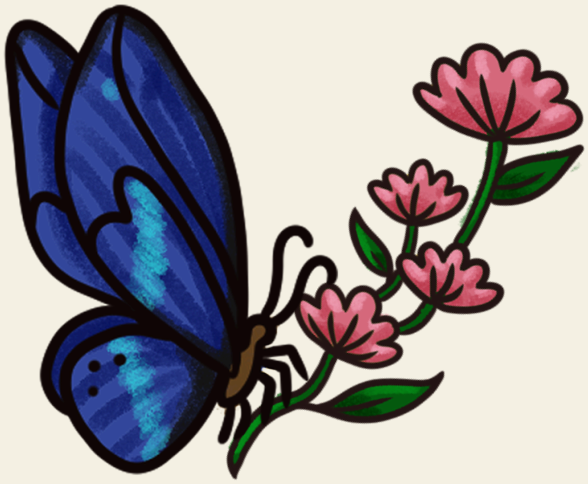
- **Investigar el delito a través de nuevas líneas de análisis:** aunque las investigaciones existentes ofrecen un panorama extenso sobre la trata de personas en Colombia, hay áreas emergentes que necesitan ser exploradas más a fondo, especialmente en lo relativo a las nuevas formas de explotación y la salud mental de las víctimas. En este orden de ideas, algunas posibles direcciones para investigaciones futuras son:

Salud mental y apoyo psicosocial para víctimas: dada la importancia de la salud mental en la rehabilitación de las víctimas, futuras investigaciones podrían enfocarse en desarrollar intervenciones específicas para atender las necesidades emocionales y psicológicas de las víctimas de trata, especialmente en las áreas más afectadas por migración y pobreza.

Trabajo forzado y formas de explotación alternativas: aunque la explotación sexual es el foco principal, estudios emergentes sugieren explorar con más profundidad los trabajos forzados y otras formas de explotación, como la servidumbre doméstica y la trata con fines de explotación criminal, que son menos visibles, pero igualmente graves.

Uso de tecnología y redes sociales en la trata: dado el aumento de casos de explotación sexual en línea, sería valioso investigar el rol de la tecnología y redes sociales en facilitar o prevenir la trata de personas. Estas investigaciones podrían enfocarse en métodos para identificar y detener la explotación online de menores de edad y en general de personas adultas.

Desarrollo de modelos comunitarios de prevención: invertir en estudios sobre modelos de prevención comunitarios que incluyan a los actores locales, como organizaciones civiles y sistemas de educación, promete ser clave para crear estrategias de prevención efectivas en áreas de alto riesgo.



Dada la escasez de investigaciones sobre trata de personas en la región Pacífica colombiana, un proyecto centrado en esta área llenaría un vacío importante en la literatura actual, con la generación de datos críticos para el diseño de políticas y programas adaptados a la realidad local. Un enfoque específico en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que analice tanto la explotación sexual como los trabajos forzados, contribuiría a una comprensión más completa y a la creación de soluciones eficaces para proteger a las comunidades más vulnerables del país en esta región.

En conclusión, se requiere una respuesta multisectorial, que no solo se enfoque en la persecución de los responsables, sino también en abordar las causas estructurales que facilitan su ocurrencia. La colaboración entre las autoridades locales, nacionales e internacionales, junto con el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y la gestión de conocimiento, son esenciales para erradicar este delito y proteger a las víctimas.

BIBLIOGRAFÍA

I. Leyes y Protocolos

- Ley 1448 de 2011. Colombia. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. (2011).

- Ley 985 de 2005. Colombia. Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de
- personas y se dictan otras disposiciones. (2005).

- Protocolo de Palermo (2000). Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2000).

II. Informes y Documentos oficiales

- Comisión de la Verdad. Pacífico. https://web.comisiondelaverdad.co/enlosterritorios/despliegueterritorial/pacifico#:~:text=Conformaci%C3%B3n%3A%20Choc%C3%B3%2C%20Valle%20del%20Cauca,que%20suman%20700%20mil%20habitantes

- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N° 002-25 (para Florida y Pradera). (2025)

- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N° 015-2024. (2024).

- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N° 009-2024 (para Juradó, Bahía Solano y Nuquí).

- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N° 005-24 (para Jamundí). (2024)

- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N° 039-2023 (para Buenaventura). (2023)

- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N° 014-23 (para Necoclí, Turbo, Acandí, Juradó,Unguía). (2023). https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/014-23.pdf

- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana Binacional N° 001-2023 (Conjuntamente con Defensoría del Pueblo de Panamá). (2023).

- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N° 019-21 (para Guadalajara de Buga, Palmira y El Cerrito). (2021)

- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N° 049-19 (para zonas rurales y urbanas de Quibdó). (Diciembre 2019).

- Defensoría del Pueblo. Entre 2017 y 2019, Defensoría emitió 108 Alertas Tempranas sobre riesgo de reclutamiento infantil. https://www.defensoria.gov.co/-/entre-2017-y-2019-defensor%C3%ADa-emiti%C3%B3-108-alertas-tempranas-sobre-riesgo-dereclutamiento-infantil

- Departamento de Estado de EE. UU. Reporte de trata de Personas 2024 (TIP Report). (2024).

- Gobernación del Valle del Cauca. Descubre la geografía actual del Conflicto Armado en el Valle del Cauca. (2024). https://www.valledelcauca.gov.co/gestionpaz/publicaciones/84884/descubre-lageografia-actual-del-conflicto-armado-en-el-valle-del-cauca/

- Gobernación del Valle del Cauca. El Valle avanza en la lucha contra la trata de personas: 18 vidas rescatadas este año. (2024). https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/83172/el-valle-avanza-en-la-luchacontra-la-trata-de-personas-18-vidas-rescatadas-este-ano/

- International Crisis Group. Tranquilizar el Pacífico tormentoso: violencia y gobernanza en la costa de Colombia. Informe sobre América Latina N°76. (8 de agosto de 2019). https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/076-calming-the-restless-pacific-sp.pdf

- Ministerio del Interior – Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas. Datos suministrados a la Corporación Espacios de Mujer. (18 de diciembre de 2024).

- Ministerio del Interior, MinInterior y comunidad Misak firman acuerdo de voluntades para combatir la trata de personas en territorios ancestrales, 20 de septiembre de 2024. https://www.mininterior.gov.co/noticias/mininterior-y-comunidad-misak-firmanacuerdo-de-voluntades-para-combatir-la-trata-de-personas-en-territorios-ancestrales/

- Observatorio del Bienestar de la Niñez (ICBF). Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia. (2020). https://www.icbf.gov.co/system/files/infografia_escnna_vf.pdf

- OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). Colombia: Briefing Departamental, Chocó, enero a diciembre de 2024. (28 de enero de 2025). https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-briefingdepartamental-choco-enero-diciembre-de-2024

- OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). COLOMBIA: Análisis conjunto e intersectorial JIAF 2.0, Equipo Local de Coordinación Valle del Cauca. (17 de abril de 2024). https://www.unocha.org/attachments/66653fde-2ef8-4e87-b3a9765c2eaa49e5/An%C3%A1lisis%20conjunto%20e%20intersectorial%20JIAF%202.0%2 C%20Equipo%20Local%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20Valle%20del%20Cauca.pdf

- OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). COLOMBIA: Briefing Departamental. Nariño, de enero a diciembre de 2023. (2023). https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-briefingdepartamental-narino-de-enero-diciembre-de-2023

- OIM (Organización Internacional para las Migraciones). Cuarenta municipios del Valle del Cauca junto suscribieron El Pacto por la lucha contra la Trata de Personas. Comunicado. (20 de marzo de 2023). https://colombia.iom.int/es/news/cuarenta-municipios-del-valledel-cauca-junto-suscribieron-el-pacto-por-la-lucha-contra-la-trata-de-personas

- Procuraduría General de la Nación. Boletín 843-2024. Más de 190 casos de trata de personas registrados en primer semestre 2024. (2024). https://www.procuraduria.gov.co/Pages/mas-190-casos-trata-personas-registradosprimer-semestre-2024.aspx

- RAP Pacífico. Plan Estratégico Regional Pacífico. (2022). https://rap-pacifico.gov.co/wpcontent/uploads/2022/12/PER-PACIFICO.pdf

- RAP Pacífico. Voces Pacífico 2021: los medios de comunicación y su responsabilidad social frente al progreso del Pacífico. (2021). https://rap-pacifico.gov.co/wpcontent/uploads/2021/06/Webinar-rol-de-los-medios-de-comunicacion-.pdf

- UNODC. GLOTIP. Global Report on Trafficking in Persons. (2024).

- UNODC. Diagnóstico sobre la ocurrencia de la trata de personas en Colombia. (Junio 2016). https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/junio/DIAGNOSTICO_SOBRE_LA_OCURRENCIA.pdf.

III. Artículos de noticia y Reportajes

- Ahora Mundo. Una mujer del Valle del Cauca denuncia haber sido víctima de trata de personas en China. Por F. Vargas. (5 de agosto de 2023). https://www.ahoramundo.com/colombia/tendencias/una-mujer-del-valle-del-caucadenuncia-haber-sido-victima-de-trata-de-personas-en-china/28669

- Caracol Radio, Más de 12.000 niñas y niños se han movilizado en contra del reclutamiento, 5 de marzo de 2023. https://caracol.com.co/2023/03/05/mas-de-12000- ninas-y-ninos-se-han-movilizado-en-contra-del-reclutamiento/

- Caracol Radio. El Pacífico: la ruta en auge de los migrantes para pasar a Panamá. (2022). https://caracol.com.co/emisora/2022/01/19/medellin/1642601415_754024.html

- Caracol Radio. Desmantelaron una red de trata de personas en Risaralda y Valle del Cauca. (8 de abril de 2021). https://caracol.com.co/emisora/2021/04/08/pereira/1617880572_576218.html

- El Colombiano. Al turismo en el Pacífico colombiano le invertirán $64.752 millones. (2024). https://www.elcolombiano.com/negocios/al-turismo-en-el-pacificocolombiano-le-invertiran-64752-millones-BG23610625

- El Colombiano. Trata de personas, fenómeno sin freno en Colombia y el mundo. Por M. Hoyos. (30 de julio de 2020). https://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-luchacontra-la-trata-de-personas-GI13390060

- El Imparcial. Denuncian "rapto" de niños indígenas para explotación sexual. (3 de enero de 2011). https://www.elimparcial.es/noticia/76556/america/denuncian-rapto-de-ninosindigenas-en-colombia-para-su-explotacion-sexual.html

- El País. A evitar que Cali se vuelva un destino de turismo sexual, autoridades lanzaron campaña 'Sembrando Protección'. (6 de junio 2024). https://www.elpais.com.co/judicial/a-evitar-que-cali-se-vuelva-un-destino-de-turismosexual-autoridades-lanzaron-campana-sembrando-proteccion-0645.html

- El País. Cae red de explotación sexual que enviaba mujeres del Valle del Cauca a China. (20 de noviembre de 2017). https://www.elpais.com.co/judicial/cae-red-de-explotacionsexual-que-enviaba-mujeres-del--del-cauca-achina.htmlhttps://www.elpais.com.co/judicial/cae-red-de-explotacion-sexual-queenviaba-mujeres-del--del-cauca-a-china.html

- El Tiempo. Trata de personas: 69 sobrevivientes en el Valle, en un año; trabajan plan de acción. Por C. Bohorquez. (18 de marzo de 2024). https://www.eltiempo.com/colombia/cali/trata-de-personas-69-sobrevivientes-en-elvalle-en-un-ano-trabajan-plan-de-accion-3325559

- El Tiempo. Víctimas de trata de personas están gravemente desprotegidas, denuncia la Procuraduría. (3 de septiembre de 2023). https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/trata-de-personas-colombia-tienemas-victimas-que-la-media-mundial-802252

- El Tiempo. Cae red de trata de personas que enviaba mujeres colombianas a Asia. (21 de octubre de 2018). https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cae-red-de-trata-depersonas-que-operaba-en-el-valle-del-cauca-283798

- Infobae. Rescatan a 28 migrantes, entre ellos un menor de edad, en el Pacífico colombiano. (24 de agosto de 2024). https://www.infobae.com/america/agencias/2024/08/24/rescatan-a-28-migrantesentre-ellos-un-menor-de-edad-en-el-pacifico-colombiano/

- Infobae. Nuevo proyecto de ley busca acabar con la trata de personas en Colombia: en 2023 hubo más de 260 casos en el país. (31 de julio de 2024). Por C. Salazar. https://www.infobae.com/colombia/2024/08/01/nuevo-proyecto-de-ley-busca-acabarcon-la-trata-de-personas-en-colombia-en-2023-hubo-mas-de-260-casos-en-el-pais/

- Infobae. Así funcionaba la red que llevaba mujeres desde Cali a España con falsas promesas de trabajo para prostituirlas. (30 de julio de 2024). https://www.infobae.com/colombia/2024/07/30/asi-funcionaba-la-red-que-llevabamujeres-desde-cali-a-espana-con-falsas-promesas-de-trabajo-para-prostituirlas/

- Infobae. Alerta por el alarmante incremento de casos de trata de personas en Colombia durante 2024. (10 de mayo de 2024). https://www.infobae.com/colombia/2024/05/10/alerta-por-el-alarmante-incrementode-casos-de-trata-de-personas-en-colombia-durante-2024/

- Infobae. Alerta por alto riesgo de violaciones a los derechos humanos en Chocó: grupos armados ilegales se han fortalecido. Por L. Gómez, 11 de abril de 2024. https://www.infobae.com/colombia/2024/04/11/alerta-por-alto-riesgo-de-violacionesa-los-derechos-humanos-en-choco-grupos-armados-ilegales-se-han-fortalecido/

- Infobae. Eran violadas en un bar: capturan red criminal que ofrecía falsos empleos para esclavizar mujeres a manos de disidencias. Por C. Salazar. 1 de septiembre de 2023. https://www.infobae.com/colombia/2023/09/02/eran-violadas-en-un-bar-capturan-redcriminal-que-ofrecia-falsos-empleos-para-esclavizar-mujeres-a-manos-de-disidencias/

- Informativo del Guaico. Gobernación de Nariño se suma a esfuerzos binacionales en la prevención de la trata de personas. (27 de noviembre de 2023). https://informativodelguaico.com/gobernacion-de-narino-se-suma-a-esfuerzosbinacionales-en-la-prevencion-de-la-trata-de-personas/

- La Silla Vacía. No es turismo, es explotación sexual: el problema a fondo. Por I. Cuesta y M. Guerra. (30 de junio de 2024). https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-delas-mujeres/no-es-turismo-es-explotacion-sexual-el-problema-a-fondo/

- La Vanguardia. Autoridades colombianas desarticulan red de trata de personas en el Amazonas. (31 de julio de 2019). https://www.aa.com.tr/es/mundo/autoridadescolombianas-desarticulan-red-de-trata-de-personas-en-el-amazonas/1393320

- La Vanguardia. Desarticulan en Colombia red que explotaba sexualmente a niñas indígenas. (31 de julio de 2019). https://www.lavanguardia.com/vida/20190731/463801362974/desarticulan-encolombia-red-que-explotaba-sexualmente-a-ninas-indigenas.html

- Mongabay. Colombia: nuevo reporte revela que más de 800 niños indígenas del Cauca han sido reclutados por grupos armados desde 2017. Por Astrid Arellano. (26 de junio de 2024). https://es.mongabay.com/2024/06/colombia-nuevo-reporte-revela-que-mas-de800-ninos-indigenas-del-cauca-han-sido-reclutados-por-grupos-armados-desde-2017/

- Observatorio Pacífico y Territorio. Denuncian "rapto" de niños indígenas para explotación sexual. (2016). https://pacificolombia.org/denuncian-rapto-de-nios-indgenas-paraexplotacin-sexual/

- Opinión Caribe. Colombia y España se unen para fortalecer la lucha contra el delito de trata de personas. (7 de diciembre de 2023). https://www.opinioncaribe.com/2023/12/07/colombia-y-espana-se-unen-parafortalecer-la-lucha-contra-el-delito-de-trata-de-personas/

- RCN Radio. Condenan a alias Lorena, cabecilla de red dedicada a la trata de personas. (23 de abril de 2023). https://www.rcnradio.com/judicial/condenan-a-alias-lorenacabecilla-de-red-dedicada-a-la-trata-de-personas

- Revista Chocó. Chocó lanza estrategia departamental 'el Chocó protege' contra la trata y explotación sexual comercial. (2024). https://www.revistachoco.com.co/judicial/chocolanza-estrategia-departamental-el-choco-protege-contra-la-trata-y-explotacion-sexualcomercial/2024/

- Revista de la Universidad de México. De norte a sur, la ruta del Pacífico colombiano, mayo de 2024. por D. Gómez Pickering. https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9e2be2c7-a681-4aa2-85eaf220bd3f0213/de-norte-a-sur-la-ruta-del-pacifico-colombiano

- Semana. Con cráneos humanos una temida red de trata de personas amenazaba a sus víctimas. (11 de noviembre de 2021). https://www.semana.com/nacion/articulo/concraneos-humanos-una-temida-red-de-trata-de-personas-amenazaba-a-susvictimas/202103/

- W Radio. Detienen en Pereira a tres integrantes de red de trata de mujeres a Italia. (8 de enero de 2022). https://www.wradio.com.co/2022/01/08/detienen-en-pereira-a-tresintegrantes-de-red-de-trata-de-mujeres-a-italia/

IV. Publicaciones Académicas / Investigaciones

- Chiarotti, S. La trata de mujeres: sus conexiones y desconexiones con la migración y los derechos humanos. CEPAL y BID. (2003). https://repositorio.cepal.org/bitstreams/f7814bd9-9344-4345-ba72-a799865a33d5/download

- Osorio-Guzmán, A., Mazorra, M., Velasco, J., Muñoz, O. Ciudades andinas y cambio climático El caso de Popayán. Papeles de Coyuntura 46, 64-90. (2019). http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/9017/CiudadesAndinas-Papeles-46.pdf?sequence=5&isAllowed.

V. Sentencias Judiciales

- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-622 de 2016 (sobre afectaciones a la salud de comunidades étnicas por la minería ilegal en la cuenca del río Atrato). (2016).

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia C-270 de 2013 (Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica por la Operación Génesis). (2013).

- Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga. Sentencias condenatorias por trata con fines de explotación sexual y otros delitos relacionados. (Agosto 2016; Julio 2016; Junio 2016; Mayo 2016; Marzo 2016; Septiembre 2013).

- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala de Decisión Penal. Sentencia condenatoria a María Yuleidi Pino Trullo por trata de personas agravado y proxenetismo con menor de edad. (Agosto 2018).

VI. Plataformas / Bases de Datos

- Fundación Paz y reconciliación - PARES. Paz, postconflicto y derechos humanos. https://www.pares.com.co/mapas/paz/posconflicto/derechos/humanos

- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). SHERLOC (Sharing Electronic Resources and Laws on Crime).

ANEXOS

Anexo 1: Entrevistas

En este documento, las entrevistas se han **codificado numéricamente** (e.j., Entrevista 01, Entrevista 02, etc.) para mantener la privacidad y facilitar la referencia.

A continuación, se presenta la correspondencia detallada entre cada código de entrevista y la persona u organización real a la que se refiere:

Entrevista 01: CORMEPAZ, Buenaventura

La Corporación Memoria y Paz de Buenaventura es un espacio comunitario que promueve la paz, la sana convivencia y la reivindicación de las memorias y derechos de las víctimas del conflicto armado en Buenaventura.

Entrevista 02: Pastoral Afro Cali, Cali

La Pastoral Afro es la acción evangelizadora de la Iglesia católica que promueve integralmente al pueblo afrocolombiano para que éste, desde su identidad cultural, viva el proyecto del Reino de Dios y lo comparta con todo hombre y mujer.

Entrevista 03: Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, Dabeiba

Las Misioneras Lauritas son parte de la Congregación Misionera fundada por Santa Laura Montoya Upegui en el 1914, con los indígenas Emberá katíos. Presente en 21 países, acompaña los pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, campesinos, marginados y excluidos.

Entrevista 04: FICONPAZ, Medellín

La Fundación Instituto para la Construcción de la Paz – FICONPAZ – es un organismo de la Arquidiócesis de Bogotá, creado en 1996 con el objetivo de aportar a la construcción de una cultura de paz en Colombia. Diseña y desarrolla procesos en comunidades de base y con sectores específicos de población, desde una perspectiva de educación para la paz que permita a las y los destinatarios ejercer con plenitud su ciudadanía, construir nuevos referentes y valores para la convivencia pacífica y la transformación no violenta de los conflictos y consolidar propuestas para la defensa, promoción y vivencia de los derechos humanos.

Entrevista 05: FUNDEPAZ, Pasto

La Fundación Desarrollo y Paz, FUNDEPAZ, es una organización que promueve el desarrollo humano sostenible en Colombia, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural.

Entrevista 06: WC, experto independiente en trata de personas, Cali

Entrevista 07: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Cali

En Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ayuda a las personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento.

Entrevista 08: Misioneros de la Consolata, Río Timbiquí (Cauca)

Entrevista 09: CMF. Misioneros claretianos de RED Tamar, Quibdó (Chocó)

La Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, popularmente conocidos como Claretianos, está en 63 países. Las actividades misioneras se concretan en centros educativos y universidades, parroquias, equipos misioneros, programas de acción social, centros superiores de estudios, centros de estudios sobre Vida consagrada, publicaciones, medios de comunicación. Sus destinatarios prioritarios son laicos y consagrados evangelizadores, jóvenes, pobres y marginados.



ANEXOS

Anexo 2. Metodología utilizada para la revisión bibliográfica

Se ha utilizado el método de revisión sistematizada de la literatura científica, con el propósito de develar el estado actual y las tendencias de producción científica y académica sobre la trata de personas en Colombia, con énfasis en el Pacífico colombiano. A partir de ello se identificaron lagunas, vacíos y posibles focos de investigación para el desarrollo de ejercicios futuros que aborden la temática.

En cuanto a la estrategia de búsqueda y la recuperación de información, la temática general fue la trata de personas. Los **subtemas** responden a explotación sexual/prostitución forzada o forzosa y trabajos forzados o forzosos en Colombia y en el Pacífico colombiano (departamentos de Chocó (Quibdó), Valle del Cauca (Cali), Cauca (Popayán) y Nariño (Pasto)).

El **periodo de búsqueda** de los artículos en revistas indexadas fue 2016-2024.

Las **fuentes de consultas** de los artículos en revistas indexadas fueron las bases de datos (Scopus, Dialnet, Scielo, Google Académico). Las tesis pregrado y posgrado se buscaron en Google académico y en repositorios académicos institucionales.

Las palabras clave fueron: trata de personas, tráfico de personas, explotación humana, explotación sexual, prostitución forzada, prostitución forzosa, trabajo forzado, trabajo forzoso, explotación laboral, Colombia, Pacífico colombiano, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño.



Resultados preliminares (Tabla 1)

Tabla 1. Publicaciones recuperadas sobre trata de personas en Colombia (2016-2024)	
Bases de datos	**#publicaciones**
Scopus	25
Dialnet	38
Scielo	5
Google académico	91
Total	**159**

Procesamiento y análisis

Luego de la recuperación en bases de datos mediante la interrogación con las ecuaciones de búsqueda, se procedió a analizar el contenido de los registros recuperados, con el propósito de valorar su correspondencia con la temática a abordar. Luego se hizo un análisis por tipologías de productos de investigación, producción temporal y temática. Identificación de focos temáticos de investigación y análisis de contenido para determinar estado actual y posibles tendencias de investigación sobre la temática, así como vacíos e identificación de necesidades de construcción y desarrollo de futuras líneas de investigación a partir de las lagunas y limitaciones encontradas.

Tipología de publicaciones. Tabla 2

Artículos	44
Tesis	21
Libro	3
Capítulo de libro	3
Documentos en repositorios	2
Total	**73**

En los artículos analizados, la trata de personas se presenta como **un problema multidimensional** donde las víctimas, principalmente explotadas sexual y laboralmente, enfrentan condiciones similares a la esclavitud moderna, agravadas por el conflicto armado, lo que incrementa la vulnerabilidad de comunidades afectadas. Los mecanismos de coacción utilizados por los tratantes muestran la violencia, el engaño y la manipulación necesarios para someter a las víctimas, mientras que términos como restablecimiento de derechos y asistencia subrayan la importancia de políticas enfocadas en restaurar la dignidad y derechos de las personas afectadas, para brindarles apoyo integral para su rehabilitación y protección. La presencia de palabras como “asistencia inmediata” y “eficacia” sugiere un enfoque en las estrategias de ayuda y rehabilitación de las víctimas en Colombia.

Una búsqueda de las noticias sobre trata de personas publicadas y relativas a estos territorios, entre 2016 y 2024 (se han utilizado los operadores booleanos detallados en el presente enlace, periódicos nacionales como El Tiempo y El Colombiano y diarios en línea como Infobae y La Silla Vacía. También se ha consultado la prensa local, tanto de medios privados (revista Chocó) como públicos (las gobernaciones de Chocó, Valle del Cauca,Nariño y Valle) y la recopilación de información de emisoras radiales como W Radio y Caracol Radio, nos permiten evidenciar una cobertura insuficiente de este tema, con la consecuente invisibilización de la trata y visión superficial del fenómeno.

Como veremos a continuación, la mayoría de las noticias encontradas se concentran en situaciones vinculadas al conflicto armado y se enfocan en la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), asociándola con la trata de personas, sin realizar una distinción clara entre ambos delitos. El enfoque periodístico es más atento a la cobertura de cifras, las detenciones de miembros de redes de trata y los casos identificados, que a la comprensión más profunda del fenómeno y confundiendo o asociando erróneamente delitos relacionados.

La búsqueda en revistas indexadas muestra una amplia variedad de enfoques, principalmente cualitativos y descriptivos, adaptados a las complejidades del tema y a las características de las poblaciones afectadas. Los principales métodos empleados incluyen:

- ***Estudios de caso***
- ***Metodologías cualitativas con entrevistas y grupos focales***
- ***Análisis de políticas públicas 70***
- ***Enfoques participativos y de co-creación***
- ***Revisión documental y análisis de literatura***

Las investigaciones sobre trata de personas en Colombia se agrupan en varias líneas principales, cada una aborda aspectos clave del fenómeno desde diferentes ángulos. Estas líneas de investigación incluyen:

- ***Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA***
- ***Migración y vulnerabilidad***
- ***Políticas públicas y protección de víctimas***
- ***Trata de personas en contexto de conflicto armado***

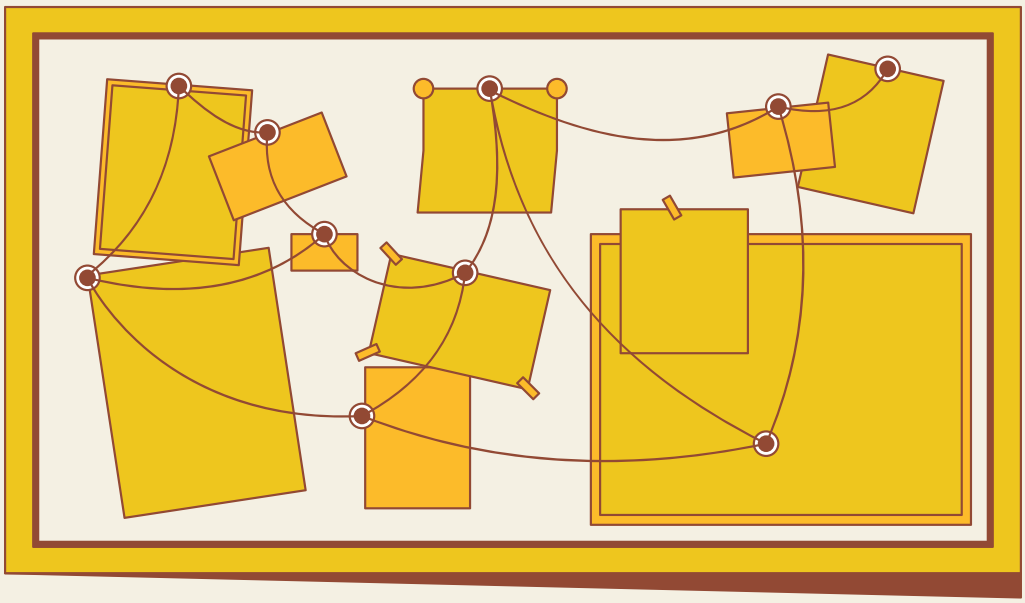
Las investigaciones reflejan la intersección de factores sociales, económicos y políticos en la persistencia de la trata de personas en Colombia. La complejidad de los contextos vulnerables, combinada con la falta de eficacia en la implementación de políticas, representa un desafío constante en la lucha contra este delito.

Diversos estudios analizan la situación de riesgo ante la trata en poblaciones específicas como personas migrantes venezolanas y comunidades afrocolombianas e indígenas. Las investigaciones destacan cómo las **condiciones económicas y sociales** incrementan el riesgo de explotación en estas poblaciones debido a la falta de apoyo estatal y discriminación en los contextos locales y transfronterizos.

Algunos estudios critican la efectividad de las políticas y estrategias nacionales para combatir la trata de personas. Señalan las deficiencias en la asistencia, protección y reparación de las víctimas, lo que destaca cómo la burocracia y los vacíos en la implementación de leyes dificultan la recuperación integral de las víctimas y la judicialización de los tratantes.

La **movilización digital y la veeduría ciudadana** son consideradas herramientas clave en la lucha contra la trata, ya que promueven la sensibilización y el control social. Además, estudios sobre métodos educativos y campañas de sensibilización destacan el papel del activismo comunitario y la educación en la prevención del delito en zonas vulnerables.

La trata de personas en Colombia está entrelazada con **economías ilegales** como el narcotráfico y el contrabando. Las investigaciones resaltan cómo estos mercados criminales amplifican el riesgo de trata al ofrecer un contexto propicio para la explotación de personas en áreas afectadas por el conflicto armado, donde los grupos armados utilizan la trata para obtener beneficios económicos y mano de obra forzada.




Espacios de
MUJER
PODER PARA SER LIBRE
mensen
met een
missie
2025